



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

24 DE MARZO ¡A LA PLAZA! CONTRA EL PACTO BUITRE Y EL PROTOCOLO REPRESIVO

El cuarenta aniversario del golpe de 1976 volverá a ser la ocasión para que miles de trabajadores, jóvenes y ciudadanos se vuelquen a las calles.

Al reclamo de juicio y castigo a los genocidas, se unirán reclamos urgentes.

Vamos a movilizarnos contra el protocolo represivo de Macri, que ya se ha cobrado a varios luchadores procesados.

Vamos a repudiar el pacto buitre, que entrega 15.000 millones de dólares a los usureros internacionales. Esa mayor esclavización financiera del país será pagada por el pueblo trabajador.

Pero los ajustes ya están en marcha, con 100.000 despidos y recortes de conquistas laborales y salariales. No sólo el gobierno Macri es el ejecutor de esa confiscación, sino también los gobernadores e intendentes, sean estos radicales, kirchneristas o "socialistas".

Para bendecir este rumbo ha venido Obama, el jefe del Estado responsable de los mayores genocidios políticos, económicos y militares contra los pueblos.

El 24 de marzo es -y siempre fue- la jornada que marcó a fuego a los responsables políticos de la "impunidad de ayer y de hoy".

Los partidos y gobiernos que apoyaron el punto final, la obediencia debida y los indultos.

Los que, llamándose a sí mismo "nacionales y populares", sancionaron la ley antiterrorista y armaron el Proyecto X, un sistema de espionaje a los luchadores.

Los que vallaron la Plaza, con Aníbal Fernández, incluso los 24 de Marzo.

La gran jornada por las libertades y por el derecho a luchar nunca puede ser el pretexto para encubrir a quienes, incluso hoy, reprimen en las provincias que gobiernan, como Santa Cruz o

Tierra del Fuego.

El Partido Obrero te invita a la marcha independiente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Vamos contra el protocolo represivo, por el desprocesamiento de los luchadores, contra el pacto buitre y los ajustes de Macri y los gobernadores.

Vamos a repudiar la presencia de Obama, y los pactos coloniales contra la Nación y sus trabajadores.

Vamos a reclamar la derogación de la ley antiterrorista y la apertura de los archivos de todos los servicios de inteligencia.

Por Maxi y Darío, por Jorge Julio López y Luciano Arruga.

Por Mariano Ferreyra, para que Pedraza -y todos los genocidas- vayan a cárcel común.

¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes!



**VENÍ CON EL PARTIDO OBRERO. CONCENTRAMOS
A LAS 14 HORAS, EN CALLAO Y RIVADAVIA**

Políticas

La era post Galuccio

El otro acuerdo buitre

Los resultados negativos de YPF, sin lugar a dudas, aceleraron el alejamiento de Galuccio. La petrolera experimentó una caída en el 50% de sus ganancias en el último ejercicio. Las expectativas que despertaba la explotación no convencional se han derrumbado junto a los precios internacionales del crudo. La gota que rebalsó el vaso es la revelación del gigantesco endeudamiento de la petrolera, que pasó de 2.000 a 7.000 millones de dólares.

Detrás de la renuncia de Galuccio, sin embargo, hay otras razones de fondo. Asistimos a la tentativa de una reconfiguración general de la actividad petrolera. En el "modelo de negocios" urdido por el presidente saliente, el capital privado debía asociarse con YPF. El convenio con Chevron era el ejemplo a imitar.

Viraje

El nuevo esquema de explotación que se está barajando permitiría, en cambio, que las corporaciones privadas hagan sus inversiones en forma independiente, prescindiendo de la petrolera como intermediario o socio. Es el puntapié inicial para el desembarco de otros grandes pulpos, que aspiran a adueñarse de los recursos petroleros a precios de remate. Como lo señaló el propio presidente para América Latina y Africa de Chevron Corp "hay que incentivar la explora-

ción y desarrollo, especialmente cuando los precios internacionales están bajos" (*Wall Street Journal* para *La Nación*, 10/3).

En la misma dirección, la consultora First Corporate Finance Advisors destaca que las fusiones y adquisiciones de empresas en el mercado local de petróleo y gas aumentarán a partir de las "señales positivas a los inversores internacionales" emitidas por el gobierno nacional, que "buscan la apertura de la economía local al mercado mundial" (*Ambito*, 15/3). El informe destaca que se busca aprovechar que las valuaciones de las empresas argentinas se encuentran entre 40 y 60% por debajo de sus pares regionales e internacionales.

En esta reconfiguración, no sólo está en juego el reparto de los hidrocarburos convencionales y no convencionales sino también los jugosos contratos de obra pública y de insumos asociadas a la explotación petrolera. Es lo que viene ocurriendo en Brasil en el que el "Petrolão" (escándalo por coimas en torno de Petrobras) se ha llevado puesto a las constructoras que orbitaban alrededor de la petrolera estatal. Dilma acaba de pactar con la oposición el desguace de Petrobras, autorizando la explotación en forma directa de los estratégicos recursos de la plataforma submarina presal por parte de los grandes pulpos petroleros. Esto nos da una pista de lo que se viene en nuestros

pagos, y que se inscribe en una tendencia continental. La crisis mundial y el derrumbe de los gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas de América latina han avivado las disputas por el reparto del botín.

Las provincias estarían interesadas en este giro pues tienen la expectativa, sacando del medio a YPF, de poder recuperar al menos parcialmente su autonomía para negociar convenios con las petroleras y sacar una mayor tajada en concepto de regalías. Estaríamos ante una suerte de retorno de la denominada "ley corta", que rigió antes de la "reestatización" (reprivatización) de YPF.

Lo que se viene

Pero el asunto no se agota allí. Una de las cuestiones centrales es la de los subsidios. "La industria de los hidrocarburos opera dentro de una burbuja subvencionada por el gobierno... En Argentina, el barril de petróleo cuesta más del doble que en Estados Unidos, y el precio del gas natural es hasta casi cuatro veces más caro" (*WSJ*, 10/3). El gobierno de Macri confirmó esta política, que representa una erogación de 5.000 millones de dólares -casi la mitad de lo que se deberá abonar a los buitres por el fallo Griesa.

Una franja de petroleras, en especial aquellas ya instaladas en el país, viene ejerciendo una

gran presión para que continúen los subsidios. Este sector es partidario de desembarazarse de la intermediación de YPF pero sin perder el auxilio estatal. Aranguren, en cambio, estaría fogueando un mayor volantazo, "enfriando" los planes de autoabastecimiento y alentando las importaciones. Esto implicaría un recorte de los subsidios. Algunos analistas asocian los planes de Aranguren a su ex empleador Shell. Es que la compañía, que se dedica en Argentina sólo a la refinación, estaría forzada a comprar el crudo al doble de su valor. Pero, el problema tiene mayor alcance. Lo que plantea Aranguren es dejar actuar al "mercado", lo que llevaría a la sobrevivencia de los pulpos con mayor espalda financiera. Es lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, donde la actual crisis del petróleo ha dado paso a un proceso de concentración.

La era post Galuccio augura una gran pelea por el botín, en la que están involucrados la nación y las provincias. Pero los capitalistas que pelean por el reparto del negocio coinciden en la necesidad de atacar las condiciones laborales. Los directivos de YPF indicaron que continuará con su plan de reducción de costos laborales y suspensiones. La compañía, por lo pronto, mantiene inactivos a 2.000 trabajadores.

Pablo Heller

Todos son Cristóbal López

Una investigación publicada ayer en el diario *La Nación* reveló que el empresario Cristóbal López acumuló una deuda de más de 8.000 millones de pesos con la Afip, por no haber pagado durante unos tres años las retenciones que Oil les hizo a sus clientes por la venta de combustibles.

El Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) representa, junto con otros cargos, el 26 por ciento del precio cobrado en el surtidor, y la falta de pago fue cubierta por diversos planes de pago que otorgó la Afip. Agreguemos que no se trata de los planes usuales de pago sino de carácter excepcional, cuyo otorgamiento es competencia exclusiva del director de la Afip. Este mismo régimen es el que accedió la empresa All Fund en el remanido caso Ciccone.

Estos planes contemplan el pago de 120 cuotas, es decir, a 10 años y a tasas de interés sensiblemente inferiores a la inflación, con lo cual la deuda termina licuada totalmente. Los

8.000 millones de pesos que se quedó Cristóbal López representan, al dólar oficial de ese entonces, más de 1.000 millones de la divisa norteamericana, que López devolverá el día del arquero.

Ahora, el caso sale a luz como parte del cerco judicial que se ha tendido contra Cristina y sus compinches. Para el gobierno macrista, es simplemente un mecanismo extorsivo y un reaseguro de que los K no van a poner palos en la rueda en el giro económico que está en marcha. El kirchnerismo, de todos modos, ya ha dado sobradas señales que, más allá de la alharaca, no va a sacar los pies del plato.

Confiscación

El mecanismo al que apelado Cristóbal López es moneda corriente. La clase capitalista bicicleta o se guarda los fondos de impuestos que recauda de sus clientes, consumidores y hasta de sus propios trabajadores como "agente de retención". Es usual que las empresas no depo-

siten las cargas sociales de sus trabajadores, tanto los aportes previsionales como los destinados a la obra social. En lugar de sacar plata de sus propios bolsillos, las patronales utilizan la plata de terceros, obteniendo una forma de financiarse prácticamente gratuita -una radiografía lapidaria sobre el carácter paritario y confiscatorio del sistema social vigente.

No debería sorprender que a la par de las maniobras de Cristóbal López, se haya destapado que hay 1.000 planes otorgados bajo ese régimen. Todavía no se conocen los nombres pero una lista tan grande ya es un indicador que estamos ante un mecanismo del cual ha usufructuado en forma generalizada la clase capitalista, amiga y no tan amiga de los K.

En la cúspide de este sistema de evasión se encuentran los bancos, que son los principales vehículos de la fuga de capitales. El caso más reciente ha sido el HSBC, que detenta 4.040 cuentas de argentinos en Ginebra, la

mayoría no declaradas, por un monto superior a 3.500 millones de dólares. La comisión bicameral que se creó para investigar la denuncia quedó desactivada.

Alfonso Prat Gay figura en dicho listado. El actual ministro está ahí en su condición de representante de Loma Negra. Varias de las empresas que allí figuran, como el grupo Grobocopatel, eran en ese entonces -en 2006/7- las niñas mimadas de los K, incluido el grupo Clarín.

Nadie está dispuesto a que la sangre llegue al río. Entre bomberos no van a pisar la manguera. El nuevo titular de la Afip acaba de anunciar que entre los proyectos que el macrismo tienen en la gatera está el de un blanqueo.

Basta de saqueo y encubrimiento. Cristóbal López debe responder con su patrimonio. El país debe resarcirse del daño procediendo a la expropiación de sus empresas.

P. H.

Editorial



MARCELO RAMAL
GABRIEL SOLANO

El XXIII Congreso del Partido Obrero, que tendrá lugar entre el 24 y 27 de marzo próximos, sesionará en medio de una transición política apasionante. La votación del acuerdo con los fondos buitre en el Congreso ha concentrado todas las cuestiones fundamentales de la etapa que se viene. Por un lado, el voto favorable de los partidos del régimen a la "ley Griesa" traduce el mandato de la burguesía al gobierno Cambiemos: tramitar un rescate financiero a manos del capital internacional, de cara a la bancarrota que deja el régimen anterior.

Dentro de este objetivo general, hay que precisar que el arreglo con los buitres debió precipitarse, sin asegurar siquiera el fin de futuros litigios en tribunales extranjeros. La razón de este apresuramiento es la temprana crisis económica del gobierno macrista. La ilusión de que el levantamiento del cepo y la devaluación posterior configuraran una transición ordenada se derrumbó rápidamente. El tarifazo, que subió los costos industriales, reforzó los reclamos capitalistas a favor de una devaluación mayor. Mientras tanto, el capital sojero prolongaba la retención de la cosecha, en el marco de una caída sostenida de los precios internacionales. De ese modo, el gobierno evitó una nueva corrida cambiaria a costa de elevar la tasa de interés a niveles astronómicos, ahondando la recesión industrial y comercial.

Este cuadro general no sólo explica la desesperación con la cual el gobierno salió a buscar el socorro del capital financiero. También anticipa el impasse económico al que conducirá la tentativa de reendeudamiento oficial. Por un lado, las nuevas operaciones de deuda deberán reciclar las hipotecas anteriores, como ocurre con las deudas del Tesoro con el Banco Central, las de las provincias y las del propio Estado nacional, que saldrán a buscar deuda para financiar sus déficits corrientes. Sólo para levantar estos muertos, la deuda pública argentina trepará por encima de los 300.000 millones de dólares. El mito del desendeudamiento -invocado por igual por oficialistas y opositores- ya no puede sostenerse seriamente.

En vísperas del XXIII Congreso del Partido Obrero

La otra contradicción del plan oficial es que convoca al capital financiero internacional cuando éste refluye de los mercados “emergentes”. Las garantías que estos ofrecían al endeudamiento -los precios de sus materias primas agrícolas, mineras o petroleras- se han derrumbado. Esto vale también para Argentina, y no sólo por la soja. La meca de Vaca Muerta y el gas no convencional, que pivotó la tentativa kirchnerista de viraje a los “mercados”, ha quedado por ahora en las carpetas. Lo mismo ocurre con los proyectos mineros. En estas condiciones, Argentina sigue el derrotero brasileño: la devaluación no ha frenado la sangría de divisas, y las nuevas emisiones de deuda financian la fuga de capitales. Los economistas que presentan a la situación argentina como una crisis de financiamiento del Estado omiten que ésta es sólo la manifestación de una crisis de las relaciones sociales capitalistas, en un plano mundial y continental. Como en otros países, el Estado argentino ha quebrado para rescatar al capital, en primer lugar, a los acreedores de la deuda “reestructurada”.

En esas condiciones, el reendeudamiento que planea el gobierno Macri sólo podría tener lugar ofreciendo la garantía de inmensas confiscaciones sociales y remates del patrimonio nacional. Hemos señalado que buena parte de éstos ya han sido rematados bajo el menemato, pero deben tomarse en cuenta las reestatizaciones transitorias que rescataron a sus anteriores vaciadores privados, como Aerolíneas (Marsans) o el 51% de YPF. En cualquier caso, la principal garantía del reendeudamiento es el ajuste de los gastos sociales del Estado. El acuerdo con las provincias, que ha servido de contrapartida o excusa para el voto de los diputados del PJ a favor de la ley Griesa, condiciona el futuro financiamiento de los distritos al “monitoreo” de los ajustes. Es la réplica interior del otro monitoreo, el que vendrá de la mano del FMI. Los rescatistas, por otra parte, van por una recolonización económica de mayor alcance. La cancillería de Cambiemos reanudó las tratativas por acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos, todo lo cual deberá procesarse en medio de choques agudos al interior de los propios explotadores.

Un régimen a la carta del capital financiero

La votación favorable en la Cámara de Diputados y la que se espera que ocurra en la de Senadores, sirven como piedra basal para la configuración del régimen político que le sigue al derrumbe del kirchnerismo. El FpV se ha partido en la primera votación del año, aunque todas las partes intentan



disimular la crisis armando una lista única en la interna del Partido Justicialista. El kirchnerismo ‘gurca’ duda en sacar los pies del plato, porque una ruptura lo dejaría reducido a la mínima expresión. El objetivo de los gobernadores de aprovechar el pacto con los buitres para endeudar a los estados provinciales alcanza al gobierno de Santa Cruz, dirigido directamente por la camarilla K. Pero incluso una competencia interna en el PJ no sería otra cosa que el recurso último y de crisis para mantener la unidad del aparato justicialista.

La carencia de mayoría parlamentaria por parte de Cambiemos ha dado lugar a un régimen político inestable, en el cual cada pacto político requiere un acuerdo específico. No sólo Massa se candidatea para votar con el macrismo en el Congreso; lo mismo hace Stolbizer y el llamado bloque Progresista, que acaba de votar favorablemente el pacto con los buitres. Un régimen de acuerdos a la carta no es el apropiado para enfrentar una bancarrota económica de dimensiones. Alcanzarán las primeras crisis para que los aliados se transformen en opositores, aún más cuando se acerquen las elecciones del 2017. Lejos de una perspectiva de estabilidad económica y política, el Partido Obrero traza su plan de acción sobre un pronóstico que tiene en cuenta la bancarrota económica y la creciente desintegración de los partidos políticos patronales.

Los trabajadores

Las convulsiones que plantea esta transición política para los trabajadores han tenido en estos meses algunos anticipos. Las luchas de Cresta Roja y del Grupo 23 mostraron las enormes reservas de lucha de la clase obrera. La burocracia sindical, en sus diferentes vertientes, actúa a cuenta de la gran patronal y del relato oficial: pasar el mal trago de un cuatrimestre “difícil”, a la espera de una reactivación posterior. Con esa expectativa, han entregado a los precarizados o contratados, o resignaron aumentos salariales y conquistas laborales a

cambio de promesas difusas de preservación de los puestos de trabajo. Así ha ocurrido con los petroleros y el Smata, o entre las burocracias kirchneristas de la docencia o el neumático. La prometida reducción del impuesto al salario ha terminado en un fraude, bajo las exigencias del arreglo colonial que votaron los mismos diputados de la burocracia.

Los despidos de los últimos meses, que rondan los 100.000, están lejos de sentenciar el resultado de las luchas que se vendrán. Por debajo de estos arreglos, han emergido enormes intervenciones obreras. Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego han sido el escenario de movilizaciones multitudinarias de docentes y estatales. Pero la marcha de la crisis y el ajuste oficial son incompatibles con la “paz” precaria de la burocracia. El colapso de Brasil ha agravado la competencia entre los pulpos automotrices del Mercosur, y la industria de aquel país reclama el fin del comercio “administrado”, o sea, del paraguas protector sobre las terminales argentinas. Mientras tanto, los nuevos administradores de YPF anticipan la intención de enjugar su crisis con despidos masivos. En suma, las grandes organizaciones obreras van a ser profundamente conmovidas. Vamos a un período intenso de luchas y movilizaciones, El Congreso del PO debatirá una política para dirigirnos a ellas, reforzando la agitación y el reagrupamiento por paritarias sin techo, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, la indexación mensual del salario, la prohibición de despidos y la preparación de la huelga general y la ocupación en cada fábrica o establecimiento que despidan. La función del activismo combativo y de la izquierda es intervenir en este proceso de luchas que tendrá su centro en los sindicatos, alejándose de las acciones de capilla, que inevitablemente conducen al faccionalismo. En ese sentido deben plantearse la campaña por congresos obreros, que en algunas provincias, dado el cuadro de agitación creado

por el ajuste, pueden tener una realización efectiva y servir como experiencia piloto para el conjunto de la clase obrera.

El mismo cuadro de luchas y deliberación política tendrá que abrazar al movimiento estudiantil, al de los desocupados, a la lucha de la mujer.

Estrategia política

La votación del pacto buitres ha dejado al descubierto la miseria política del kirchnerismo, el cual, sin embargo, se autopostula para liderar la oposición popular al gobierno. La intervención de Máximo Kirchner en el Congreso, señalando que “no deben ponerse piedras en el camino” de los ajustadores macristas, delata el carácter impostor de su voto contra el pacto buitres. Sólo buscaron disimular el apoyo compacto que, en pocos días, brindarán los senadores K en favor del acuerdo. La Cámpora se ha subordinado a la normalización del Pejota, que tendrá como eje a “Barrick” Gioja. El kirchnerismo es un partido del ajuste, como lo demuestran los recortes brutales de Alicia Kirchner en Santa Cruz y de Bertone en Tierra del Fuego. Todo lo anterior demuestra la enorme ficción política de presentar a los choques sociales en curso como un enfrentamiento entre macrismo y kirchnerismo. De este modo, asocian al derrumbe del nacionalismo capitalista con el de las perspectivas reivindicativas y políticas de los propios trabajadores. La izquierda que se asocia a este fraude político no sólo está hipotecando la lucha contra el macrismo, sino también las conquistas que en términos de independencia política se jalieron al cabo de una década de lucha contra los “nacionales” de Chevron.

La estrategia que guía la acción del Partido Obrero es transformar a la clase obrera y a la izquierda en la oposición política al macrismo. Esto significa explotar las tendencias que anidan en las masas a la lucha contra el ajuste, sobre la base de una política independiente. La delimitación con el kirchnerismo como así también con el centrozquierdismo debe hacerse sobre la base de una iniciativa política creciente. El terreno conquistado por el Frente de Izquierda debe ser desarrollado sistemáticamente por medio de la agitación, la propaganda y la organización.

Por medio de una intensa agitación política y de un trabajo metódico de organización de los activistas, es necesario hacer emerger la verdadera “grieta nacional” -entre los partidos capitalistas y su Estado, de un lado, y la izquierda y la clase obrera, del otro. El Congreso del Partido Obrero debatirá los planteamientos, las consignas y los métodos de organización para esa gran tarea.

Dentro y fuera del Parlamento, una gran campaña contra el pacto colonial

La jornada del pasado martes 15, cuando se trató la ley Griesa en el Congreso, fue el momento culminante de la movilización política que viene llevando adelante el PO contra este pacto colonial.

Consulta tramposa

En los debates previos, sólo el PO presentó un dictamen de minoría. El proyecto del PO se diferencia del dictamen presentado por el FpV bajo la batuta de Recalde y Kicillof -que parte de reconocer la necesidad de pagar a los buitres, pero un poco menos. El PO en cambio, impugna el acuerdo y plantea la revisión integral y la investigación de toda la deuda pública, la suspensión de su pago, a excepción de las tenencias de jubilados y pequeños ahorristas, mediante lo cual se hará saltar gran parte de su carácter mayoritariamente fraudulento y usurario. El proyecto del PO plantea la formación de una comisión investigadora, nominada por un congreso de trabajadores electos con ese fin. Sus conclusiones deberán ser volcadas al debate nacional durante por lo menos 60 días, para marchar a un referendo nacional para que el pueblo decida qué hacer frente a esta deuda.

En el inicio de la sesión, Recalde (FpV) propuso como "moción de orden": pasar a cuarto intermedio y abordar su proyecto llamando a una consulta popular. Este proyecto habría sido presentado el 11 de marzo, tres días después que el PO



El discurso de Pitrola fue trending topic en Twitter durante varias horas.

presentara el suyo en el debate preparatorio. Fue una reacción frente a nuestra propuesta, pero sólo para encubrir la capitulación de su bloque.

EL FpV presentó su moción -que no podía prosperar- con el único objetivo de posar de opositor a los buitres. Néstor Pitrola rechazó esta polarización 'para la tribuna', cuestionando la hipocresía de levantar esa consigna que ya había sido presentada por el Frente de Izquierda cuando se discutió la ley de pago Soberano hace más de un año, y que entonces fue rechazada por el kirchnerismo. Además, señaló Néstor, quieren encubrir el voto sin fisuras que le darán a la ley buitres en el Senado "Después de 12 años quieren un proyecto para pagarle un poquito menos a los buitres. No tienen autoridad política ni moral para plantear esto" (*Clarín*, 16/3). De ese

modo, anunció la abstención de los tres diputados del PO-FIT.

En este punto, Myriam Bregman del PTS, votó junto a Recalde, Kicillof y el FpV. Fue un acto de seguidismo a los K, detrás de una "moción" que no tenía ninguna chance de prosperar y que sólo servía como campo de maniobras para disimular el sometimiento del kirchnerismo al capital financiero.

En el recinto y en las calles

Para que no hubiera dudas, en la banca de nuestros diputados se pegaron cartelitos que planteaban: Abajo el Pacto Buitre y que fueron captados por los medios televisivos. También se pegaron otros carteles en apoyo a la lucha de los trabajadores contra el vaciamiento del empresario K, Szpolski, del Grupo 23.

Los discursos planteados

por nuestros tres diputados -Pitrola, Sosa y Pablo López- tuvieron gran repercusión. El discurso de Pitrola fue "trending topic" en Twitter durante varias horas, y acumula ya miles de visitas en nuestra página web.

Al igual que el 1 de marzo, cuando vino Macri a inaugurar las sesiones parlamentarias, concretamos una movilización y un acto callejero, donde nuestros diputados se dirigieron a los manifestantes. Pablo López denunció a diputados y senadores salteños que iban a dar su voto al pacto con los buitres, siguiendo los acuerdos establecidos por el gobernador Urtubey con el macrismo.

Soledad Sosa, la diputada por Mendoza, llamó a apoyar las luchas obreras, particularmente los docentes que se han movilizado masivamente en Santiago del Estero, Tierra

del Fuego, Neuquén y ahora lo estaban haciendo en su provincia. Pitrola cerró el acto en forma vibrante. Denunció el carácter mediocre de la sesión, donde había intervenciones penosas de diputados que hablaban para encubrir la entrega. Señaló que se estaba votando el último paso del camino iniciado por los K con los canjes I y II, la indemnización a Repsol y el pago al Club de París. Llamó a utilizar las bancas parlamentarias del Congreso Nacional y las legislaturas para denunciar este pacto colonial y convocar a los trabajadores del país a movilizarse. Pronosticó que "se van a topar con la clase obrera en lucha" contra el ajuste. Llamó a organizar una presencia masiva en la marcha del 24 marzo para repudiar a Obama, el pacto colonial y el ajuste.

Durante la noche, una patota K hostilizó y amenazó físicamente a los diputados del PO, particularmente a Pitrola. Una guardia espontánea de militantes garantizó la seguridad de los "diputados de los trabajadores". Cuando salieron, luego del discurso de Soledad Sosa, fueron vitoreados por los compañeros reunidos frente al Congreso. Las denuncias del PO dolieron a quienes son cómplices de la entrega.

Con el reparto de volantes, actos en puerta de fábrica, charlas en colegios y locales, y agitaciones en plazas, vamos por una gran columna este 24 de Marzo.

Rafael Santos

Pablo López denunció a Urtubey y las entregas provinciales

El diputado salteño del PO denunció al gobernador Urtubey "como una de las piezas fundamentales para el apoyo al acuerdo con los buitres" por parte de los gobernadores provinciales, reunidos hace una semana con Frigerio y Macri para cerrar la devolución progresiva de la coparticipación y la habilitación al reendeudamiento local. Uñac, Bertone y Gutiérrez, entre otros, salieron rápidamente a apoyar la propuesta del ejecutivo.

López señaló a Urtubey como la cabeza provincial de este sometimiento a la agenda entreguista y señaló como antecedente que en plena campaña electoral, como vocero de Scioli, viajó "a Estados Unidos a reclamar que se lleve adelante este acuerdo" y luego "fue Urtubey el que armó el bloque del PJ" para garantizar el quórum y los votos necesarios.

López puso en evidencia las gravosas consecuencias con la firma de este pacto. "Ya hay

una fila de provincias que se están anotando para contraer sus propias deudas, esperando que este acuerdo se apruebe (...) deudas que tienen como garantía un brutal ajuste contra el pueblo". Ajuste que ya empezó, como en la provincia de Córdoba "que ha pedido una deuda de más de 1.000 millones de dólares, a tasas usurarias", en donde el gobernador "retiró la conquista del 82% móvil para los jubilados" bajando diez puntos el ingreso de los mismos, señaló el diputado salteño, quien afirmó que los gobernadores están dando señales que el endeudamiento, para salvar los quebrantos provinciales y el rescate de los capitalistas locales, se hará a costa de despidos, salarios de miseria, reformas jubilato-

rias y laborales a la baja. "En el Gran Rosario y en todo el litoral santafesino arrecian los despidos, como ha ocurrido con los 400 trabajadores de ArZinc", agregó López. Todas estas nuevas deudas se harán a tasas usurarias, casi al 10% anual. "Mi provincia también está esperando la aprobación (...) para emitir deuda por 300 millones de dólares a tasas por arriba del 8%". La deuda de Salta "debería investigarse", vociferó el diputado del PO. "Esos fondos no han ido a parar a obras públicas ni nada, sino a rescatar los negocios de los grupos monopólicos" y agregó que Urtubey puso las regalías hidrocarburíferas como garantía de endeudamiento, al igual que hizo Romero en su gobierno. "Romero

y Urtubey vendieron las joyas de la abuela, entregando prácticamente de por vida nuestras regalías hidrocarburíferas", remató López.

Por último, destacó la reacción obrera ante el ajuste en curso: "la CGT de San Lorenzo ha convocado a un gran paro, las masivas movilizaciones en Tierra del Fuego, Santiago y otras están mostrando la enorme reserva de los trabajadores argentinos para enfrentar el ajuste que está en marcha". Y cerró: "Es claro, señor presidente, que voy a ser el único legislador nacional de la provincia de Salta que va a votar en defensa del interés del conjunto del pueblo argentino y del pueblo salteño".

Mariela Solesio

“Un Congreso de entrega nacional”

La intervención en Diputados de Néstor Pitrola fue una pieza de acción revolucionaria en el parlamento. La comparación con el pacto Roca-Runciman, de entrada, no pudo ser más oportuna, marcó su tono y su alcance. Aquel, fue la pieza clave de la Década Infame: “éste pacto buitres es un pacto colonial de rescate del capital financiero contra la República Argentina, única agenda del gobierno Macri y de las fuerzas que gobernaron para el pago de una deuda usuraria durante 40 años (...) En el fondo hay una convergencia entre los K y el macrismo en el rescate total de la deuda. La grieta no es entre macristas y kirchneristas, es entre ajustadores y ajustados”, lanzó Pitrola a los medios, que esperaban su opinión en el salón de Pasos Perdidos.

Pitrola polemizó con el kirchnerismo, denunciando que su votación en contra representaba un fraude porque “votarán a favor en el Senado”, que es donde está en riesgo la mayoría, “y porque su dictamen de minoría propone pagarles sólo algo menos”, pero pagar al fin. Luego, relativizó la supuesta quita, tan arengada por el macrismo, señalando que “el proyecto de ley plantea el pago del 100% del capital y tres veces el capital en intereses”; además, apuntó contra su artículo 4, el cual dice que el techo de pago es hasta el 100% de la sentencia de Griesa, lo cual constituye un cheque en blanco para la deuda no arreglada todavía. Al mismo tiempo, volvió a cargar contra los argumentos del kirchnerismo, representados en el informe de Kicillof: “el oficialismo arguye que el lucro cesante de los canjes 1 y 2, si en su momento hubieran entrado estos bonistas, es equivalente a este acuerdo colonial. Tienen razón (...) El canje 1 y 2 fue un negociado de rescate de deuda de la misma magnitud que este pacto buitres. Este pacto

buitres es el último eslabón de una política que ejecutó el kirchnerismo: el Club de París, los tribunales del Ciadi, la escandalosa indemnización a Repsol”. “Macri completa la obra para la cual al kirchnerismo no le dio la nafta”.

Pitrola marcó que “la sentencia de Griesa, la no intervención de la Corte norteamericana y la visita de Obama para bendecirla” forman parte de una política del imperialismo a favor de la “rendición nacional” a la que ligó más adelante las visitas de Hollande y De Renzi. Y allí colocó una idea de fondo: “vienen a reforzar al gobierno de Macri en sus debilidades, nosotros explotaremos esas debilidades para que el movimiento obrero derrote el ajuste de Macri y los gobernadores, desde Urtubey hasta Alicia Kirchner”.

Denunció la jurisdicción extranjera en que “volverán a incurrir después de criticarla”, pero además, didácticamente, contrapuso el cumplimiento de las sentencias del amo del norte con las de los “tribunales previsionales y aún de la Corte Suprema argentina, contra las que se apela hasta la muerte para no pagar los juicios de centenares de miles de jubilados”. Luego, puso en evidencia el contraste del sistema impositivo: “Paul Singer y su gente tampoco van a pagar impuestos, que acá pagamos hasta en los salarios, porque este arreglo no tributa un dólar de ganancias”.

En su discurso, Pitrola refutó las promesas macristas de bajas tasas de interés, señalando que “ya la provincia de Buenos Aires suscribió deuda a una tasa usuraria del 9,37%” y denunció: “a un plazo de diez años, los bonos que se emitan nos van a costar 30 mil millones de dólares, esto no lo escuché acá”, lo que representa el doble del acuerdo inicial. La Banca Morgan ha sido un eje del negociado de las deudas. “Creo que



al ministro de Economía lo puso la Banca Morgan. Ha sido su carta fuerte”, afirmó. La primera función del acuerdo es garantizar la fuga de capitales, “de manera inmediata, automática, va a venir la suscripción de deuda por los giros de utilidades pendientes que quedaron del cepo, y ya tenemos de entrada otro gatillo de 20 mil millones de dólares de deuda, que también son dólares que se van a ir del país”. Descartó la lluvia de dólares para desarrollo alguno: “vendrán a refinanciar pasivos y fuga de capitales.”

Pitrola anticipó que este acuerdo es la punta del ovillo para un nuevo ciclo de endeudamiento y refutó que este acuerdo usurario evitaría un ajuste. “La realidad es que en estos noventa días tenemos 110 mil despidos y en noviembre, diciembre, enero y febrero, una inflación del 15%, que proyectada es un 50% anual; 38% las tasas de interés, que están infartando la economía en la depresión; \$4.900 pesos a los jubilados”. “El ajuste que está en marcha, en verdad, es la precondición de este pacto buitres”, señaló Pitrola: “un reporte de Standard & Poor’s publicado por Ambito Financiero arrojó que la nueva calificación dependería en gran medida de la capacidad del

gobierno para implementar su reforma económica (...)”, traducido al criollo: la capacidad que tenga de aplicar el ajuste.

El discurso formuló una caracterización y un pronóstico: “No coincidimos con CFK, quien dijo que si Macri arregla con los buitres dura 12 años; mucho antes se va a topar con el movimiento obrero argentino, que reaccionará incluso superando la burocracia sindical comprometida en el ajuste”.

La agenda de los trabajadores

En su discurso, Pitrola planteó nuestra agenda: “El Frente de Izquierda tiene una propuesta de ajuste: por ejemplo, no pagar los 68 mil millones de pesos que el gobierno Macri reconoció del negociado de Kicillof y Cristina Kirchner del dólar futuro”, levantó la voz Pitrola, colocando los intereses de los trabajadores contra el rescate del capital. Y siguió: “Segunda medida, investigación y suspensión del pago de la deuda que sea considerada ilegítima en la República Argentina -otro ajuste a los bancos, que han ganado como nunca en la etapa precedente, y han ganado con títulos públicos”. “Miren si tenemos para ajustar: a las mineras,

a las petroleras; en cambio, a las mineras se las premió con una rebaja de retenciones y a las petroleras se les paga el doble del precio internacional del petróleo, que lo pagamos en los surtidores con aumentos sistemáticos”.

Luego, explicó que nuestro dictamen de minoría plantea la formación de una Comisión Investigadora, avalada en un Congreso de Trabajadores, con delegados electos, para investigar toda la deuda, su carácter ilegítimo, su carácter usurario, suspender el pago a excepción de aquellas tenencias de jubilados o pequeños ahorristas, y que esas conclusiones sean volcadas en un referendo nacional para tener un gran debate, de dos meses, en todas las organizaciones populares.

Reivindicó todas las grandes luchas obreras del momento y colocó un programa inmediato: “prohibición de despidos por un año, aumento de emergencia a los jubilados, abolición de ganancias en los salarios, 40% de aumento y un salario equivalente a la canasta familiar” y marcó “el no pago de la deuda como eje de un plan económico alternativo, que recupere el control soberano de banca, del comercio exterior, de los recursos estratégicos”.

En el cierre Pitrola planteó que “el Frente de Izquierda se plantea como una alternativa política contra este capitalismo, contra esta organización social, que tiene a las deudas como un factor de opresión nacional de los pueblos y nos vamos a apoyar en la lucha del movimiento obrero para constituir una alternativa política que lleve a los propios trabajadores al poder, para terminar con las guerras, con la expoliación de las deudas, con el hambre, la miseria y la explotación del hombre por el hombre”.

Julio Romano

Soledad Sosa: “El ajuste viene de la mano de la represión de la protesta”

La diputada nacional del PO por Mendoza desenmascaró al Poder Ejecutivo, cuando dice que “si hay acuerdo no hay ajuste” “La nueva deuda no financiará inversiones productivas, sólo servirá para hacer frente a los quebrantos provinciales y deudas anteriores”, sintetizó. Afirmó que su provincia, Mendoza, arroja una deuda acumulada

de aproximadamente 15 mil millones de pesos y que a través de aceptar el acuerdo, “el gobernador Cornejo ya ha conseguido autorización para más que duplicarla en el corto plazo”.

Nuestra diputada mendocina hizo eje en las consecuencias del acuerdo con los fondos buitres y en este sentido marcó que “el ajuste es precondición de ese

rescate”, desnudando el relato macrista. “Con un patrimonio nacional que ya fue rematado, el gobierno ofrece como único respaldo los presupuestos nacional y provinciales, que serán sometidos a un recorte brutal” en gastos sociales y despidos en la administración pública, para solventar estas nuevas hipotecas. Sosa, además, denunció que paralelamente se opera un rescate del conjunto del capital en vistas a las recientes medidas de reducción de impuestos y eliminación de retenciones al agro y las mineras, mientras se producen “miles de despidos en el sector público y privado, más los tarifazos”. Fue enfática al señalar

que la orientación del ajuste es “sobre los bolsillos de las familias trabajadoras” y dijo que los 107 mil despidos que se produjeron en el sector público y privado en todo el país son prueba de ello.

La intervención de Sosa tuvo su punto fuerte en la denuncia sobre la aplicación del protocolo antipiquete. Denunció que el gobierno de Mendoza fue el primero en aplicarlo sobre Raquel Blas y Roberto Macho, referentes sindicales de Ate de esa provincia y aseveró que se montaron grupos paraestatales y patotas que han agredido físicamente a activistas sindicales. “La aplicación del ajuste viene de la mano de la represión

y la regimentación de la protesta. Están buscando quebrar la voluntad de lucha de todos los trabajadores” y marcó que el gobierno necesita demostrarle al capital financiero que son capaces de aplicar el ajuste. “Contra la agenda del rescate al gran capital, vayamos por el 82% móvil, la prohibición de despidos, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre salarios de convenio, el pase a planta de todos los precarizados (...) Que el ajuste se haga sobre los que se roban la riqueza nacional: la banca, las mineras, petroleras, el capital agrario concentrado”, remató Soledad Sosa.

Mariela Solesio

CORDOBA

Después del “acuerdo”, se desata la lucha de los estatales

El gobierno de Juan Schiaretti arremete fuertemente contra el conjunto de los estatales. Inauguró su gestión recortando las jubilaciones provinciales, con la aprobación de la ley 10.333 que calcula el 82% sobre la remuneración una vez deducidos los descuentos de jubilación. En la misma sintonía que el gobierno nacional, comenzó el año recortando y resintiéndolo áreas centrales, como es el caso de 15 despidos en la Secretaría de Trata y 75 en el Ministerio de Desarrollo Social, entre muchos otros.

Frente a todos estos ataques, el sindicato mayoritario de estatales (SEP) no movió un dedo. Para desviar la presión que comenzaba a ejercerse desde las bases, el secretario general, José Pihen, decidió marchar contra los supermercados por la inflación. Legislador oficialista, Pihen rechazó y ninguneó todas las iniciativas promovidas por el Frente de Izquierda en la Legislatura para defender a los trabajadores. Pihen esperaba que la paritaria de la Unión de Educadores (UEPC) con la provincia impusiera un acuerdo miserable a los docentes del 25% en dos cuotas, para poder justificar un acuerdo similar entre los



estatales, pero la maniobra no le salió: los docentes rechazaron en todas sus asambleas la propuesta de la burocracia y se lanzaron a la lucha.

Mientras el gobierno se “autodictaba” la conciliación obligatoria para los docentes, Pihen se apresuró y decidió arreglar un acuerdo ruinoso de un aumento de 2.000 pesos a partir de febrero y 700 pesos a partir del sueldo de julio. Esas sumas llevan a un achatamiento salarial y representan entre un 26 y 28% anualizado, que es aún menor porque se paga en dos cuotas. El anuncio del

42% en algunos casos es una impostura, se trata de los contratados que pasarán a cobrar un sueldo bruto de 8.367 pesos, una verdadera vergüenza. Del acuerdo se excluyó a los otros sindicatos que intervienen en el ámbito público, ATE y UTS (Salud) y nunca jamás fue tratado en ninguna asamblea de base.

Con el acuerdo, la burocracia de estatales pretendió evitar lo que sucede en docentes y trató de cortar la enorme tendencia a luchar de los trabajadores; pero consiguió lo contrario. De inmediato los hospitales se pro-

nunciaron en contra, realizaron asambleas y se declararon en lucha por el aumento salarial. UTS rechazó el acuerdo, exige un 45% de aumento y definió un plan de acción que ya comenzó con asambleas y cortes en toda la provincia. ATE también rechazó. El martes 15 de marzo se desarrollaba una movilización provincial. La lucha por el salario empalma con la lucha contra los despidos que los trabajadores vienen desarrollando contra el gobierno y la burocracia sindical. Las trabajadoras de la Secretaría de Violencia ya lograron la re-

incorporación de la totalidad de las compañeras despedidas.

El viernes 11 de marzo, el gobierno envió la policía a reprimir al Ministerio de Desarrollo Social cuando los trabajadores se encontraban realizando una asamblea y algunos compañeros pretendían encadenarse. Hasta ahora, Schiaretti ha pasado el ajuste con la complicidad de la burocracia sindical que se niega a convocar las asambleas de base y emprender un plan de lucha. Frente a la superación de esa burocracia, prepara la represión.

La situación no da para más. Para obtener el 40% de aumento, derogar la ley 10.333, reincorporar los cientos de despedidos, y pasar a planta a todos los contratados, es necesario un plan de lucha, con asambleas en todas las reparticiones que voten un programa que unifique a todos los estatales y que marche a la asamblea general y la movilización provincial. La crítica y la superación de la burocracia sindical que se alinea con el ajuste de Schiaretti es central para garantizar el triunfo. Tribunal Estatal-Tribuna de Salud está empeñada en esta perspectiva.

Pamela Chomiak

ELECCIONES MUNICIPALES DE RIO CUARTO

Presentar una gran fuerza de los trabajadores

Para el 12 de junio están convocadas las elecciones municipales en Río Cuarto. Los comicios se desenvolverán en el marco de un acelerado deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador del distrito. Al incremento del impuesto inmobiliario cercano al 30%, a los tarifazos de luz y transporte público, se sucederá el aumento del gas y un nuevo intento de subir el costo del boleto. Mientras tanto las tasas de industriales y comerciantes se mantienen congeladas. El gran capital agrario, dominante en la zona, directamente no paga impuestos municipales y los provinciales se encuentran desactualizados desde los '90.

Según el propio gobierno, durante 2015 el municipio tuvo un déficit operativo mensual de 3,6 millones de pesos. El déficit en las cuentas públicas es el resultado de la actuación de la Municipalidad como una caja recaudadora al servicio de las empresas como SAT y Cotreco. El munici-

pio paga a sus prestadores contrayendo deuda. El intendente actual, el radical-macrista Juan Jure sigue la orientación de toda la burguesía; someter las cuentas públicas para salvar al capital y contraer deuda para pagar deuda.

Los candidatos del ajuste

La UCR tiene cinco postulantes a suceder a Jure, que termina su mandato sin cumplir las promesas por las que fue electo. Cada día, uno de los posibles sucesores se despacha con críticas al oficialismo, como si ellos no tuvieran nada que ver con la actual gestión. No obstante el carácter derechista de las candidaturas radicales, todas alineadas con Macri, el Partido Socialista llegó a un acuerdo para integrar las listas de la UCR-PRO.

El PJ iría dividido a estas elecciones. Sin embargo, las encuestas dan arriba al delator Juan Manuel Llamosas (Unión por Córdoba) sobre cual-

quier candidato de Cambiemos. Detrás de Llamosas se encolumnan elementos que provienen del extinto armado sciolista y sectores K.

El apoyo del “progresismo” del PS y los kirchneristas a los candidatos del gobierno nacional y del provincial, deja en claro su disgregación política y su total adhesión al programa de ajuste, recortes salariales y despidos que imponen esos gobiernos.

Debut del Frente de Izquierda y los Trabajadores

Río Cuarto es recorrida por una movilización popular que se ha expresado en varias marchas masivas en los últimos meses, como por ejemplo la marcha contra el aumento del boleto o contra la impunidad reinante en la ciudad, como así también por NiUnaMenos. Desde el Partido Obrero abordamos la campaña electoral con el objetivo de desarrollar una fuerte agitación

política contra el ajuste de los gobiernos capitalistas y marchar al reagrupamiento de los luchadores para avanzar en una gran fuerza política que defienda esa perspectiva. Vamos también por el ingreso de concejales de izquierda en el Concejo. Sobre esa orientación estamos recorriendo los barrios de la ciudad y los frentes obreros, convocando a los trabajadores a debatir y organizarse para dar la batalla por todas las reivindicaciones pendientes, y para que la ciudad sea gobernada en función de los intereses populares.

El PTS, de reciente presencia en la ciudad, ha anunciado mediáticamente que tiene candidato a Intendente por el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda, que incluye también a IS, no se ha reunido para discutir el punto aún, tampoco ha elaborado un programa para la elección. Al PTS ni siquiera se le conoce el programa que levanta en la ciudad. La apropiación

indebida del FIT tiene un objetivo concreto: buscan, por medio del chantaje, una representación que no tienen en la ciudad o, peor aún, la ruptura del FIT. Desde el PO Río Cuarto rechazamos esta maniobra electoralista. Exigimos discutir con el FIT y los luchadores de Río Cuarto un método democrático y de frente único que nos permita abordar con las mayores fuerzas posibles la campaña electoral.

Vamos por el debut electoral del Frente de Izquierda en Río Cuarto. Presentemos una gran fuerza de los trabajadores, con una campaña obrera y socialista que enfrente a los capitalistas y sus políticas de ajuste. Vamos por el ingreso al Concejo Deliberante. Llamamos a todos los activistas de los diferentes movimientos del distrito a confluír y apoyar las listas del Frente de Izquierda.

Comité PO Río Cuarto

Tierra del Fuego se rebela contra el ajuste

Tierra del Fuego sufre el mayor ajuste aplicado sobre las espaldas de los trabajadores en todo el país, llevado a cabo por la gobernadora del FpV, Rosana Bertone.

El ajuste

En el primer mes de gobierno, a principios de enero, se aprobó un paquete de leyes de ajuste: se aumentó la edad jubilatoria, llevándola a 60 años; se descontó entre un 1 y un 4,5% del salario a los estatales activos y entre un 8 y un 15% a una gran parte de los jubilados; a los médicos se les desconocieron las guardias en el cómputo para las jubilaciones, aunque deben seguir pagando aportes y contribuciones sobre ellas; se descontó un 5% a las pensiones a las personas con discapacidad.

Siguen despedidos 200 docentes talleristas y cientos en el ámbito central, pero amplió la planta política para poder manipular, mediante la extorsión del despido, a más de 150 trabajadores. Continúa el plan de dar de baja más de 800 planes del precarizado PEL

(Programa de Entrenamiento Laboral).

La respuesta obrera

Los estatales fueguinos han respondido con muchísima fuerza, unidad y organización.

El 1 de marzo se realizó un paro provincial en rechazo a este paquete de leyes de ajuste con un acatamiento enorme y se logró arrancar una reunión con los legisladores. A dicha reunión acudieron sólo tres legisladores de los 15 que integran la Legislatura. Dirigentes de los distintos gremios estatales decidieron quedarse dentro del edificio hasta esperar una respuesta, que nunca llegó. Se votó el paro provincial nuevamente y una asamblea de estatales votó una movilización y acampe a la Casa de Gobierno.

El gobierno apostó al desgaste, creyendo que la lucha de los estatales mermaría, pero una asamblea votó nuevamente paro y movilización, que contó con un acatamiento aún mayor.

El miércoles 9, el paro provincial tuvo un acatamiento

del 90% y en Ushuaia marcharon más de 10 mil personas, la movilización más masiva de los últimos 20 años, desde las movilizaciones por justicia por Víctor Choque, el primer asesinado durante el menemismo.

Ante semejante presión popular, el vicegobernador, Juan Carlos Arcando, recibió a los dirigentes de los gremios estatales, sin lograr que se levante el acampe. Al día siguiente, el gobierno reculó y ofreció modificar ciertos artículos, pero sólo los que son inconstitucionales. La consigna de la asamblea permanente de los estatales fue clara: "derogación de todo el paquete de leyes de ajuste".

Crisis política

El primer signo de resquebrajamiento político fue la renuncia del ministro de trabajo provincial. Luego, el municipio de Río Grande se negó a acompañar los descuentos compulsivos. Por último, ante las gigantescas movilizaciones, el intendente de Ushuaia, de La Cándida, decidió despegarse de la gobernadora y pedirle

que vuelva atrás con el paquete de leyes.

Sin embargo, los tres intendentes que respondían a la gobernadora apoyaron el paquete de leyes. El recule de los intendentes viene de la mano de la enorme movilización popular y una participación de los municipales muy grande en todas las movilizaciones. Tal es así que los municipales de Ushuaia continúan con el acampe y el paro. También influye la interna del peronismo, que va a elecciones en dos meses.

Se profundiza la lucha

Es destacada la unidad de los trabajadores y de los gremios ante esta situación. Continúa el acampe y siempre se ha respetado lo que la asamblea diaria de estatales decide. La maduración política de los trabajadores fueguinos es notable. Los últimos días, en un gesto de solidaridad de clase se han plegado sindicatos privados al reclamo y pronto se plegarían también Camioneros y la UOM.

Una multitudinaria Marcha

de Antorchas coronó el lunes 14 en Ushuaia una nueva jornada de lucha. Una imponente asamblea votó, antes de la Marcha de Antorchas, una campaña de firmas para la revocatoria de la gobernadora y una nueva jornada de bloqueos a los accesos de la ciudad que se desarrolló exitosamente el 15 de marzo.

La gobernadora ha echado a correr el rumor de un acuerdo, desmentido por los sindicatos en lucha. En la medida en que no haya respuestas positivas, está planteada una nueva movilización que -según todos los pronósticos- podría superar las anteriores.

Los estatales fueguinos vamos por:

Derogación del paquete de leyes de ajuste

Reincorporación ya de los despedidos.

Basta de precarización, pase a planta de los PEL.

¡Paritarias libres y sin techos, ningún congelamiento ni rebaja salarial!

Fernando Germani

La crisis política llega a la Policía Federal

La caída de Di Santo y la asunción de Roncaglia, sospechado de diversos delitos

“¿Pusieron a Roncaglia? No te puedo creer. Es una señal fuerte para Jaime (Stiuso), porque él lo hizo comisario cuando no le daban los años”. El asombro del agente de la AFI (ex Side), quedó impreso en la nota periodística (*Clarín*, 12/3). La misma fuente habla de los vínculos del nuevo jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, no sólo con Antonio “Jaime” Stiuso; también con Pedro “Lauchón” Viale, mano derecha de Stiuso en la Side y asesinado por el grupo Halcón de la Bonaerense cuando estalló una interna por cuestiones de drogas, desarmaderos de autos robados y operativos fraguados. Jorge Rodríguez, un ex agente del Ministerio de Seguridad, denunció a Roncaglia por “robo de bienes y sustancias, coimas, gastos de comidas del personal, reparaciones de vehículos y arreglos edilicios, horas extras y comida y vacunas para los perros” (idem).

El nuevo jefe de la Federal, como se ve, hace honor a las tradiciones de la fuerza. También a la política de espionaje de Mauricio Macri, recostado en el viejo aparato de la SIDE,

heredado de la dictadura, que comandaba Stiuso; es decir, repite la alianza que en su momento anudó Néstor Kirchner con los resultados conocidos.

Como gato entre la leña, Roncaglia intentó despegarse de Stiuso y dijo que el espía “no es mi amigo” (*Urgente24*; 16/3), pero nadie dijo que lo fuera; y que Stiuso “no tuvo nada que ver con mi nombramiento” (idem), pero tampoco en ese caso se dijo que “Jaime” lo hiciera designar jefe de policía, sino que lo hizo ascender a comisario “cuando no le daban los años”. Por su lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó los cargos contra Roncaglia “a que hay gente que no lo quiere”. Todo un argumento, como se ve.

La interna policial

El jefe renunciante, Román Di Santo, perdió una interna feroz derivada del caso Nisman y del traspaso de lo más sustancioso de la Federal a la Ciudad de Buenos Aires; esto es, la fusión con la Metropolitana de las 54 comisarías de la PFA, con sus patotas de calle y las divisiones de Homicidios y Robos y Hurtos, al punto que

personal de la (¿ex?) Federal se entrena en el Instituto de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana. Es más: los diarios ya hablan de “tensiones” por ese asunto entre el gobierno nacional y el de la CABA, de modo que el asunto golpea de lleno en las grietas internas del macrismo. La crisis política se desenvuelve imparable, y en la policía eso se siente de un modo particular.

La interna en la Federal la perdió Di Santo con quien es y seguirá siendo el hombre más poderoso de la fuerza: el comisario general Guillermo Calviño, jefe de la omnipotente Superintendencia de Seguridad Metropolitana que controla las comisarías de la CABA. “Calviño tiene la calle, y el que tiene la calle tiene el poder”, dice una fuente policial citada por esa misma nota de Clarín. Es una pelea mafiosa por el control del territorio. Calviño, que no disimula su proximidad política con Macri, está citado para el 14 de abril por el juez Sebastián Casanello, quien tiene a su cargo una denuncia contra el jefe policial por haber encubierto a dos efectivos que coimearon a un dealer y le roba-

ron una bolsa con marihuana.

Di Santo estaba en la cuerda floja desde el día en que Alberto Nisman apareció tirado en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza. En principio porque él tenía diez hombres asignados a la custodia del fiscal, que debían protegerlo durante las 24 horas todos los días; pues bien, ninguno de ellos estaba con Nisman cuando le llegó el tiro del final. Además, Di Santo estuvo con Sergio Berni, la fiscal Viviana Fein y personal de su propia fuerza y de Prefectura en la casa de la víctima, o sea que fue uno de los que se dedicaron a contaminar la escena del crimen y arruinar evidencias.

Sin embargo, no es por eso que la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y querellante en la causa, carga contra Di Santo, sino por la difusión de fotos íntimas que el fiscal muerto guardaba en sus electrónicos. Esos aparatos fueron procesados por gente de Apoyo Técnico de la Federal, y de allí se filtraron para la campaña contra Nisman que en su momento organizó el kirchnerismo. Ahora, se dice que esas

filtraciones fueron una maniobra (¿de Calviño?) para voltear a Di Santo. Si así fue, lo lograron.

En definitiva, la caída del jefe y del subjefe de la Federal (Héctor Tebes, reemplazado por la comisaria mayor Ester Franco, que viene de Asuntos Internos y luego Violencia Familiar) son recursos de crisis. Apuntan a un reamado mafioso de la Federal para ponerla bajo control político del gobierno, pero esto no hace más que reavivar las internas dentro de la policía y del propio gobierno.

Ahora, los 17 mil federales que se fusionan con la Metropolitana -una policía militarizada y particularmente brutal- se dedicarán, claro está, a su función natural de organizar el delito, pero sobre todo a responder a las necesidades gubernamentales de reprimir a los trabajadores que se alzan contra los despidos, la carestía y los tarifazos. En otras palabras: de llevar a la práctica la aplicación de la ley antiterrorista del kirchnerismo y del protocolo macrista.

Alejandro Guerrero

Cuarenta años, una historia de la impunidad

Los actuales juicios por los delitos de la dictadura genocida forman parte de una cadena de marchas y contramarchas, cuyo punto de partida fue la ley de autoamnistía dictada por la última junta militar en las vísperas de la asunción de Raúl Alfonsín.

El juicio y castigo era un clamor popular en ascenso, que afectaba la "transición democrática" pactada entre los principales partidos patronales y los militares y auspiciada por el imperialismo. El gobierno radical intentó encausar el juzgamiento de los genocidas -de la cúpula de la dictadura- a través de los tribunales militares. Pero la maniobra fracasó por la resistencia de los milicos.

Para intentar contener la movilización democrática de masas, en 1985 el gobierno instruye el llamado Juicio a las Juntas. Fueron juzgados sólo los doce integrantes de las cuatro juntas militares que encabezaron la dictadura. Las penas fueron un revés para las expectativas democráticas de las masas: los jueces condenaron a prisión perpetua solamente a Jorge Videla y Emilio Massera; Roberto Viola fue condenado a 17 años de prisión y Lambruschini y Agosti a 8 y 4 años, respectivamente. Galtieri y Anaya fueron absueltos. La cuarta junta militar ni siquiera fue procesada. La "teoría de los dos demonios" del alfonsinismo estaba en su apogeo.

Luego del alzamiento carapintada de Semana Santa, Alfonsín y todo el arco de partidos del sistema firmaron el Acta Democrática del 19 de abril de 1987 junto a Aldo Rico, donde cedieron a sus presiones y se reivindicó la doctrina de la obediencia debida -que había sido formulada por Alfonsín mucho antes de los acuartelamientos. El Partido Obrero fue el único que desde el vamos se negó a asistir a las reuniones con el gobierno radical, rechazó la firma del "acta democrática" y denunció la capitulación del alfonsinismo y todos los partidos.

Este acta, que velaba por "el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado" fue el origen de las leyes de Punto Final y Obediencia debida.

La sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sellaron la política oficial de desmoralizar a quienes se movilizaban contra la impunidad. La masacre de La Tablada sellaría con sangre el rabioso militarismo del gobierno alfonsinista. Los indultos de Menem -entre 1989 y 1990- fueron la conclusión de ese operativo político. Los militares se reclitaron en democracia, fundaron sus propias empresas, ofrecieron sus servicios a distintos grupos capitalistas o simplemente se retiraron.



El Partido Obrero en lucha contra la dictadura.

Sin embargo, la movilización popular no cesó y comenzaron a llegar del exterior los pedidos de extradición de represores por casos que afectaron a extranjeros o a compañeros con doble ciudadanía. El gobierno de la Alianza se negó a autorizar las extradiciones y las presiones judiciales harían eclosión durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sólo frente ante los pedidos de Baltazar Garzón y a 30 años de los hechos, el régimen accedió a que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el expreso pedido del kirchnerismo de eliminar del proyecto de ley la anulación de los indultos, lo que hubiera significado el inmediato encarcelamiento de Videla y compañía. El objetivo era garantizar que los represores fueran juzgados en el país a manos de la Justicia que sancionó la "continuidad jurídica" entre regímenes constitucionales y militares y con la asistencia de sus "camaradas de armas". Esta capitulación política fue el mal menor que Néstor Kirchner decidió soportar ante la crisis de envergadura que significaría la extradición masiva de militares.

Los juicios en la actualidad

A 40 años del golpe, las cifras oficiales hablan de unos 1.500 genocidas procesados y se dictaron unas 400 sentencias -de las cuales sólo 104 fueron ratificadas por la Corte Suprema de la Nación.

Estas cifras son escurridizas, porque en casi todos los juicios se repiten los acusados (Luciano Benjamín Menéndez, por ejemplo, tiene en su haber más de 16 sentencias, por ejemplo).

Del universo de condenados, más del 40% goza del beneficio de prisión domiciliaria sin custodia.

Se mantienen bajo siete llaves los archivos de la dictadura. El kirchnerismo simuló "aperturas"

con informaciones que ya eran conocidas hace mucho, sin afectar a los servicios de inteligencia del Estado, celosamente custodiados durante su mandato por dos personajes con actuación bajo la dictadura: "Jaime" Stiuso (Side) y César Milani (inteligencia militar). Las pruebas de los juicios son aportadas fundamentalmente por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.

Estos juicios marchan lentamente. Las víctimas sobrevivientes deben declarar una y otra vez en calidad de testigos y, mientras tanto, esperar años para que se juzguen sus propios casos, de tal modo que nuestro compañero Pablo Rieznik falleció antes de que su secuestro y torturas fueran juzgadas por un tribunal, a pesar de que declaró, en 2009, como "testigo" en el marco del juicio Atlético Banco Olimpo, donde estuvo secuestrado. En el caso de Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo (LF), declaró por primera vez por la desaparición de su hijo, por petición de Apel de realizar una declaración anticipada. Para llegar a esta instancia tuvo que esperar 39 años desde la desaparición y 10 desde la reapertura de los juicios. Durante los debates, siguen apareciendo nuevos nombres de compañeros que estuvieron en los distintos centros clandestinos. Los casos de nuestros compañeros de Política Obrera Marcelo Arias, Gustavo Grassi y Fernando

Sánchez, llegarían a juicio recién en 2018. La impunidad está lejos de haber terminado.

Las condenas sobre los represores por privación ilegítima de la libertad representan el 32%; por torturas, el 26%; por homicidios, el 16%. Sin embargo, las condenas por apropiación de menores representan apenas el 6%, y por delitos sexuales el 4%. De las mujeres secuestradas, el 16,2% estaban embarazadas al momento de su desaparición (según los datos del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, 2015).

En un solo caso se dictó una condena por genocidio contra los genocidas: ocurrió en 2015, en el juicio contra la Fuerza de Tareas N° 5, en la ciudad de La Plata, donde el Tribunal Oral Federal N° 1 hizo lugar a la petición de la abogada Pía Garralda, de Apel, en su alegato.

A 40 años del golpe de Estado, seguimos reclamando el juicio y castigo.

- Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros.
- Apertura ya de los archivos.
- Contra el desaguaje del Banco Nacional de Datos Genéticos.

30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡presentes!

El 24 de Marzo, todos a la Plaza.

Liliana Alaniz (Apel)

Megacausa Esmá

En la megacausa Esmá, donde se juzga a 50 genocidas (el juicio inició en 2012 con 70, pero la muerte los fue librando de la condena), Apel alegará en nombre de Justicia Ya Buenos Aires, solicitando la condena por

genocidio para todos los impudados los días 30 y 31 de marzo y el 4 de abril. Para presenciar los alegatos, presentarse de 9 a 14 en Comodoro Py 2002, con DNI.

L. A. (Apel)

Vigencia de la movilización del 24 de Marzo

La movilización del 24 de Marzo tiene una vigencia extraordinaria por varias razones.

La primera de ellas es que, a 40 años de ocurrido el golpe, el genocidio continúa impune.

Fue necesaria una movilización popular incesante durante la dictadura, y luego contra las maniobras -leyes de impunidad, indultos- de todos los gobiernos que le sucedieron, para que al cabo de casi tres décadas hubiera algo parecido a "juicio y castigo".

Como se ha dicho ya mil veces, estos juicios iniciales en 2006 se desarrollan a cuentagotas. Juzgan a algunos jerarcas y a un puñado de represores identificados por sobrevivientes y familiares y sus resultados son mezquinos en relación con la magnitud de los crímenes de que son acusados. Desde la Corte y desde el gobierno de Macri se alienta abiertamente la generalización del beneficio de la "prisión domiciliaria" para los genocidas.

Miles de militares y policías que actuaron bajo la dictadura aún continúan en funciones.

Sin ir más lejos, dos connotados exponentes de aquella generación son "Jaimito" Stiuso y César Milani, protagonistas de la guerra de camarillas y servicios de inteligencia que eclosionó públicamente con la muerte del fiscal Nisman. La perpetuación del aparato represivo formado en la Escuela de las Américas, en los planes Conintes y Cóndor, en la Doctrina de la Seguridad Nacional y la "guerra contra la subversión", está en la base de su putrefacción actual.

Todos los gobiernos recurrieron a sus servicios para enfrentar crisis políticas. Alfonsín, tras aplastar el copamiento del cuartel de La Tablada, para respaldar el estado de sitio contra los saqueos provocados por la hiperinflación. Menem se asoció para el contrabando de armas y para reprimir las puebladas en Santiago del Estero, Cutral C6 y el norte de Salta. De la Rúa recurrió a la Side y a los escuadrones de la Federal para cometer un baño de sangre contra el Argentinazo. Duhalde hizo lo propio en la Masacre de Avellaneda. Los K montaron un aparato de inteligencia con sede en Campo de Mayo para espiar

a las organizaciones obreras y populares e involucraron decididamente a la Gendarmería y a las Fuerzas Armadas en la "lucha contra el narcotráfico", en sintonía con los lineamientos del Departamento de Estado yanqui.

En la víspera de este 40 aniversario, volvemos a denunciar la complicidad de la burguesía, de sus partidos, de la Iglesia y del imperialismo con el golpe genocida.

La movilización del 24 de Marzo es una caja de resonancia de los reclamos democráticos y sociales de los trabajadores y la juventud. El kirchnerismo intentó estatizarla a través de la cooptación de organismos de derechos humanos y declaró feriado el 24. El frente único de organismos y partidos de izquierda reunió en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia defendió durante todos estos años su independencia frente al Estado. Una divergencia estratégica, que este año nuevamente se expresará en la disputa por la Plaza.

En el acto del Encuentro, la lucha de los 30.000 desaparecidos será reivindicada junto a



las luchas actuales que enfrentan al ajuste y la represión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Vamos a Plaza de Mayo a respaldar a los obreros de Cresenta Roja, a los municipales de La Plata, a los docentes de Santiago del Estero, a los trabajado-

res de la construcción y los municipales de Santa Cruz; a los compañeros de ATE Mendoza procesados; a repudiar el "protocolo" represivo de Macri-Bullrich y los gobernadores y a las leyes antiterroristas de los K. Vamos en apoyo a las luchas de estatales, bancarios, metalúr-

gicos y periodistas contra los despidos.

A 40 años del golpe genocida, moviliémonos contra la impunidad de ayer y de hoy. Abajo el pacto buitre. Fuera Obama.

Ni olvido ni perdón.

Jacyn

Un norteamericano en Buenos Aires

De acuerdo con las últimas informaciones, Obama tendrá su entrevista con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el gobierno quiere llevarlo a la Esma. Asimismo, Mauricio Macri anticipó que le pedirá al jefe de Estado yanqui que abra los archivos vinculados a la dictadura (aunque no aclaró si él procederá a lo mismo con los archivos criollos). El macrismo lo ensalza como demócrata y Premio Nobel de la Paz.

"No obstante (...), los dos ejes centrales de la agenda de Obama con Macri estarán ocupados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional. Se prevé que sobre estos temas se cierren acuerdos concretos de cooperación bilateral, como un mayor intercambio de información de la DEA con la oficina antinarcóticos de aquí, la ampliación de cursos de capacitación a las



fuerzas de seguridad y el trabajo conjunto en misiones de paz en zonas de conflicto en el mundo" (La Nación, 12/3).

Detrás de la lavada de cara "humanitaria", la misión de

Obama apunta a respaldar el acuerdo buitre y al reforzamiento de la colonización de los servicios de inteligencia y de todo el aparato represivo local a manos del imperialismo.

A 40 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA
LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY

NO OLVIDAMOS. NO NOS RECONCILIAMOS

LUNES 21/3 18:30HS | JORGE ALTAMIRA
FACULTAD DE DERECHO | DRA. SOIZA REILLY (FISCAL CAUSA ESMA)
SALÓN VERDE - AV. PRES. FIGUEROA ALCORTA 2263 | ELIA ESPEN (MADRE DE PLAZA DE MAYO LF)

CAUSA PARTIDO OBRERO apel Judiciales

EXCLUSIVOS DE INTERNET > UNIVERSIDAD-UJS > WWW.PO.ORG.AR

La Mella-Patria Grande: esquizofrenia Vol. II. Por Fede Casas
Unlam: las autoridades y la Liga Federal proscriben a la lista de la UJS. Por La Comuna- Ujs
Se realizaron los campamentos de la UJS del NOA. Por Luciano Grupalli

FRENTE A LA CASA DE MENDOZA

Acto contra la persecución a Blas, Macho y Lorite

El 10 de marzo, la Coordinadora Sindical Clasista se movilizó a la Casa de Mendoza en Buenos Aires para repudiar la imputación de Raquel Blas y Roberto Macho, dirigentes de ATE Mendoza, y Federico Lorite, del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea).

Los dirigentes gremiales son los primeros imputados por el protocolo antipiquetes de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Están encausados por la realización de una marcha en el cuadro del paro nacional estatal del 24 de febrero pasado. Se les busca aplicar el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión, por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra". El gobierno de Alfredo Cornejo (Cambiamos) prosigue la línea de persecución contra los trabajadores que efectuaba el ex gobernador justicialista Paco

Pérez.

Asistimos a un ataque contra todo el movimiento obrero. La movilización había sido decidida en una asamblea de centenares de trabajadores y delegados estatales. Un petitorio en rechazo a la imputación ha cosechado una multitud de firmas del movimiento obrero combativo, incluyendo numerosas seccionales de Suteba, de ATE, el Sitraic, y la AGD-UBA.

La actividad culminó con un acto frente a la Casa de Mendoza. Participaron, entre otros, los diputados nacionales del Partido Obrero-FIT Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa; Marcelo Ramal (legislador porteño); Guillermo Kane (diputado provincial por Buenos Aires); Gabriel Solano; Ileana Celotto (secretario general de AGD-UBA); dirigentes de ATE Sur y de ATE Capital.

Raquel Blas señaló que "lo más grave es que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo,



Marcha en Buenos Aires contra la aplicación del protocolo represivo a los compañeros mendocinos.

aparte de adherir al protocolo antiprotesta social de Bullrich está armando un aparato paraestatal de represión para amedrentar a los trabajadores". Días después de la imputación, el secretario general de ATE, Roberto Macho, fue agredido por una patota en el marco de

un volanteo contra los despidos en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Blas concluyó que "vamos a derrotar esta política represiva luchando en las calles por los reclamos de los trabajadores".

Soledad Sosa, diputada nacional por el PO-FIT de Mendo-

za, denunció que "el protocolo y la represión son la otra cara del ajuste que el gobierno de Macri les da como garantía para un acuerdo a los buitres".

Abajo la persecución contra Blas, Macho y Lorite.

Corresponsal

Apelamos el sobreseimiento a los jueces del soborno

El juez federal Norberto Oyarbide dictó el sobreseimiento de Eduardo Riggi en la causa que investiga el intento de soborno con el que Pedraza intentara comprar su impunidad tras el crimen de Mariano Ferreyra. Los abogados que representamos a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre apelamos esa resolución.

La investigación de la llamada "causa de las coimas" comenzó a partir de las escuchas judiciales ordenadas en el marco de la causa judicial que investigaba el crimen de nuestro compañero. Allí se detectaron las maniobras que involucran a ambos jueces, a Pedraza, a un agente de la ex Side que revestía como "personal de Presidencia de la Nación" y al entonces vicepresidente del Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria Angel Stafforini. Durante la investigación judicial del asesinato de Mariano Ferreyra se conoció esta maniobra ideada para manipular el sorteo de Casación y lograr que la causa se radicara en la mencionada Sala III. En septiembre de 2012 fueron proce-

sados, además de José Pedraza, Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de la Cámara de Casación Penal; Juan José Riquelme, ex agente de inteligencia; Angel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas; y Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces.

La fiscalía había requerido que Eduardo Rafael Riggi fuera indagado. Oyarbide no sólo rechazó el pedido sino que en un arbitrario fallo que minimiza las pruebas dictó el sobreseimiento. Esas pruebas dejan al desnudo que los constructores de la maniobra esperaron que el empleado de la cámara Luis Ameghino Escobar, "el señor de las teclas", manipulara el sorteo para que una vez que se radicara en la Sala III de Casación tener la mayoría a través de los jueces Riggi y Michell (quien falleció, por lo cual se extinguió la acción penal respecto a él) para obtener el fallo buscado.

En las "escuchas", surge claramente que "el amigo Eduardo" -como es mencionado Riggi-

y Michell ya habían recibido otras "atenciones" de parte de Pedraza y que negociaban el pago de una coima en dólares para sobreseer a los patoteros detenidos hasta ese momento.

Eduardo Riggi continúa revistiendo como juez de la Cámara de Casación por un pacto entre el kirchnerismo y el macrismo, previo al cambio de gobierno. La investigación fue demorada durante meses por el juez Luis Rodríguez, más tarde promovido al fuero penal por el kirchnerismo.

Es de público conocimiento que Oyarbide acordó su jubilación con Macri para evitar el juicio político por haber favorecido al matrimonio K en varias causas de corrupción. Antes de su retiro, efectúa un nuevo acto funcional al poder político de turno y la corporación judicial.

Este fallo es una muestra más de la voluntad política de declarar el punto final tanto en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra como en sus investigaciones derivadas.

Claudia Ferrero (Apel)

Confirman espionaje contra dirigentes políticos

En plena campaña electoral, en octubre del año pasado, las denuncias judiciales de las entonces diputadas del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, pusieron en evidencia una red de pinchaduras telefónicas contra dirigentes políticos, periodistas y jueces que eran de este modo espionados -aparentemente- por ex miembros de los servicios de inteligencia y por el Ejército.

El espionaje, según las denunciantes, se habría desarrollado desde las dependencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citefa), en Villa Martelli, y la información les fue provista a las diputadas por un ex agente de la Side. De acuerdo con las denunciantes, había 202 intervenciones.

El juez Sebastián Casanello, en cuyo juzgado recayó una de las causas, ha dado a conocer el informe de un peritaje ordenado a un experto de la Universidad Tecnológica Nacional. Este señala que "al realizar la pericia solicitada sobre dichos aparatos telefónicos se determinó que los mismos habrían sido afectados por un virus conocido como 'trojano', el cual se trata

de un software que es útil para modificar, borrar, extraer archivos, habilitar cámaras y micrófonos, permitiendo así escuchar y grabar las conversaciones de su usuario" (Infobae, 10/3).

Se han confirmado 33 casos de los 202 denunciados, entre ellos el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, además de Margarita Stolbizer, Victoria Donda, el juez Claudio Bonadio y las juezas Sandra Arroyo Salgado y María Servini de Cubría, el ex jefe del ejército César Milani, el gobernador cordobés José Manuel De la Sota, Héctor Magnetto, y los periodistas Jorge Lanata y Carlos Pagni, entre otros. Se ha ordenado un nuevo peritaje a cargo de la Policía Metropolitana.

Figura también entre los casos confirmados de espionaje Marcelo Ramal, legislador porteño por el PO-Frente de Izquierda.

Luego de Proyecto X, estas nuevas revelaciones vienen a confirmar la existencia de un régimen de servicios que debe ser desmantelado.

Corresponsal

Chaco: un régimen quebrado y un salvavidas de plomo

El ajuste y la crisis política nacional han pegado en la línea de flotación del régimen político del Chaco. La baja en la coparticipación federal, la baja en el fondo sojero y la parálisis de la obra pública con fondos nacionales han colocado knock-out a la economía provincial. A esto se suman las paritarias a la baja y el congelamiento de planes sociales y cooperativas de vivienda. Una parte sustancial de las cuentas públicas se encuentran embargadas por un viejo juicio de los trabajadores judiciales a quienes no se les respetaron los aumentos producto de la ley de Enganche con el Tribunal Superior de Justicia.

La crisis ha puesto de relieve la inviabilidad del esquema económico armado bajo el kirchnerismo. La entrega masiva de tierras al capital sojero, el acaparamiento y el despoblamiento rural, no fueron compensados con ninguna política de industrialización. Todo lo que se armó, por el contrario, fue un colchón de cooptación y control social sobre la base del presupuesto estatal. La quiebra de las finanzas públicas golpea de lleno en este esquema.

La salida a esta encerrona que promueve el gobierno de Domingo Peppo es un masivo endeudamiento, sumado al alineamiento macrista en busca de fondos nacionales. Por un lado, se reclama endeudamiento para pagar viejas deudas, como los embargos de los judiciales. Por otro, para la realización de obras públicas que tienen, en todos los casos, el objetivo de desarrollar el complejo exportador, con el cual ganan un puñado de pulpos agroindustriales que actúan en la provincia. En última

instancia, bajo la presión del déficit, el endeudamiento será usado para gastos corrientes. La precondition de cualquier endeudamiento, y de los fondos nacionales, será un ajuste despiadado. El acuerdo con los fondos buitres ha quebrado al peronismo de la provincia. Peppo se aferra a la "governabilidad" y la búsqueda de "financiamiento". Gustavo Martínez Campos anunció que votaría en favor del acuerdo, y lo propio haría el senador Aguilar. Capitanich, por su parte, aspira a presentarse para conducir el PJ nacional bajo la batuta de La Cámpora. Hizo votar en el congreso provincial que los legisladores nacionales por Chaco votarían contra el acuerdo. Pero el mismo Capitanich reclama endeudamiento. Apunta a recuperar un préstamo de 40 millones de dóla-

res de la CAF para resistencia. Mientras aplica un ajuste en regla en la municipalidad, con el aumento del Estacionamiento Medido (tres veces más caro que en Capital) y un impuesto inmobiliario en puerta. Hay contratados de la Municipalidad suspendidos desde diciembre. Los golpes y contragolpes de la interna del PJ incuban una crisis política provincial.

En estas condiciones, el golpe que ya se siente en las condiciones de vida del pueblo de la provincia es demoledor. La respuesta popular, sin embargo, todavía está dando sus primeros pasos. La docencia se organiza lentamente a través de la huelga docente de Sitech Federación y Atech. La denuncia de los despidos en Cultura, los despidos en el Promeba o en la subsecretaría de Agricultura familiar sacuden reparticiones estatales. La burocracia

sindical y el gobierno actúan como el factor de contención. La Justicia mantiene intervinido el principal gremio de la provincia, la UPCP, frente a la pasividad de la dirección de Niz. La Uocra ha paralizado toda reacción en la construcción, con promesas y llamados a la calma. Otro tanto ocurre con las "organizaciones sociales" oficialistas, que no se movilizan a pesar de la parálisis de los planes de construcción, cuyo presupuesto baja a cuenta gotas.

Para el movimiento popular, es vital sacudirse este corsé de contención, lo que implica poner en pie una dirección independiente para enfrentar el ajuste. Con una gran campaña de agitación, el Partido Obrero se empeña en esta tarea.

Juan García

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Crece el dengue en Lugano y en Soldati

En las últimas semanas, el dengue ha afectado a gran cantidad de vecinos del barrio de Lugano. Hasta hoy, no existe un registro oficial sobre el cual verificar la cantidad de afectados.

El jueves 10, la ministra de Salud visitó la Villa 20 (donde se concentran la mayor cantidad de casos de dengue autóctono), para anunciar algunas medidas a tomar frente a este problema.

La visita fue un verdadero bochorno: cuando los vecinos y organizaciones sociales exigimos respuestas de la ministra, lo único que pudo expresar fue que en los centros de atención primaria (Cesac) del barrio se brindarán 10 turnos diarios, y que a cada persona que venga con síntomas les darán una crema repelente. Es decir que su propuesta fue la entrega de 50 repelentes por semana, y dos por día para el personal.

De esta manera, el ministerio sigue desconociendo la emergencia que existe y la amenaza de epidemia que el dengue significa para la población de Lugano.

La atención sanitaria se encuentra hasta este momento saturada; así lo expresan trabajadores del Cesac 18. Esta demanda de atención no tiene en cuenta, sin embargo, a los vecinos que tienen dengue y no



Marcelo Ramal visitó la Villa 20 y alertó sobre el avance del dengue.

concretan la consulta.

Los focos de proliferación se encuentran a la vista de todos, los vecinos que lindan con la zona del ex barrio Papa Francisco (hoy transformado en un basural) se acercan con síntomas constantemente. El mosquito se está propagando más rápido que las medidas de asistencia oficial.

El ocultamiento de esta realidad es parte de la política que ha tenido el Gobierno de la Ciudad sobre la crisis habitacional, social y ambiental que existe hoy en la Comuna 8. Mientras crecen los casos de dengue autóctono, el gobierno sigue paralizando la finalización del hospital de

Lugano, amenaza con el cierre del único Cesac (el 18) que existe en la Villa 20 y posterga la inauguración del Cesac 43.

La falta de urbanización de la Villa 20 y de infraestructura sanitaria o de servicios básicos es verdaderamente calamitosa. El gobierno no se quiere hacer cargo de la profunda crisis social que sufre esta comuna.

Necesitamos que se elabore un verdadero plan de emergencia bajo control de los vecinos, frente a una situación que amenaza a toda la población de la Comuna.

Grecia (Villa 20)

MISIONES

Para frenar el tarifazo: ¡movilización!

En Posadas y otras localidades, como Jardín América, se vienen realizando grandes movilizaciones contra el tarifazo de Emsa. En principio fueron convocadas por las redes sociales, empezaron con pequeñas concentraciones a movilizaciones de miles de personas y la ocupación del oficialista Canal 12.

La situación no da para más, con la llegada de las boletas de enero se recibió un aumento de más del 300% impagable para muchas familias. Este aumento se anticipó inclusive a la quita de subsidios de Nación. ¿Cómo puede ser que tengamos estas boletas impagables en una provincia inundada por Yaciretá y con la represa de Uruguái, justamente en un año con producción récord de energía? El gobierno provincial ofreció financiar para que se pueda pa-

gar en tres cuotas las boletas mensuales.

Desde el macrismo tratan de imputar el aumento al gobierno provincial, una clara impostura ya que los tarifazos son parte fundamental del plan del gobierno nacional. Es importante para los trabajadores distanciarnos de los pedidos del PRO-UCR de la intervención nacional de Emsa, ya que esto no es un problema únicamente administrativo y el interés del PRO es nombrar funcionarios para estructurar su aparato en la provincia.

Desde el Partido Obrero, venimos impulsando asambleas en los barrios y lugares de trabajo para ganar las calles y frenar el tarifazo de Macri-Passalacqua.

Gustavo

PRENSA OBRERA

La próxima edición de Prensa Obrera N° 1.404 aparecerá el jueves 30 de marzo

Sindicales

Volkswagen ajusta, el Smata no "resiste"

Suspensiones masivas, despidos encubiertos y rebaja salarial

A partir de la caída del mercado brasileño y el ajuste general que el grupo Volkswagen (VW) está imponiendo a todas sus plantas del mundo (para afrontar los costos del fraude ambiental cometido en Estados Unidos con los motores diesel), la patronal alemana le informó al Smata que la producción en la planta de Pacheco para 2016 será aproximadamente de 60.000 unidades (casi 40 mil menos). La empresa elimina el turno noche, a partir del 21 de marzo. Esto, por supuesto, con el resultado de 1.600 trabajadores sobrantes.

El Smata le propuso a la empresa un esquema de suspensiones rotativas que afectara al total de la planta, a cambio de que los despidos sean encubiertos bajo la forma de retiros "voluntarios" y jubilaciones anticipadas. Al día de hoy, a pesar de la propuesta antiobrera del Smata, la empresa no la ha aceptado. Los tres turnos que actualmente rotan una vez por mes, lo harían semanalmente entre mañana y tarde y estarán suspendidos cuando les toque el turno noche. A esto hay que sumarle una suspensión semanal, es decir que se trabajará cuatro

días a la semana. Ocho días de suspensión sobre los veintiuno laborales del mes, lo que significará una brutal rebaja del salario.

Solamente desde noviembre de 2015 se perdieron más de 200 puestos de trabajo con la metodología de los retiros voluntarios y las prejubilaciones. En lugar de plantear que la empresa se haga cargo de su crisis, el sindicato la reparte entre el conjunto de trabajadores de VW. La única salida viable para los trabajadores es el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, el rechazo de cualquier esquema de suspensiones y ningún despido encubierto.

Buitres...

Oscar Romero, diputado y burocrata del Smata, viene de romper con el bloque del FpV porque, según dice, es necesaria una "oposición responsable". Romero hace referencia al proyecto de "ley de autopartes", que pretenden presentar, como la solución a todos los males de la industria, como prenda de cambio para votar la entrega nacional a los fondos buitres. El contrasentido no podría ser

mayor: el Smata votará a favor del pago de miles de millones al capital financiero, a cambio del tratamiento de una ley que pretende llevar del 25 al 50% la fabricación de autopartes en la argentina. El argumento de la burocracia es verdaderamente ridículo: cuando las terminales no le pueden vender más autos a nadie, Romero pretende votar la entrega nacional a cuenta de un proyecto inviable. La crisis capitalista desnuda el carácter patronal de la burocracia sindical.

La colaboración del gremio con Macri también pasa por neutralizar cualquier tentativa de resistencia independiente por parte de los trabajadores para frenar el ajuste en marcha. Las terminales automotrices, y particularmente VW, han tenido ganancias espectaculares y beneficios extraordinarios (subsídios, exenciones impositivas, etc.) durante los gobiernos kirchneristas, y el actual gobierno aumentó esos beneficios aún más. Como contrapartida, los trabajadores metalmeccánicos tuvieron pérdida del poder adquisitivo del salario, por el doble efecto de la inflación y el impuesto a las ganancias. A su vez, los reajustes trimestrales



siempre estuvieron por detrás de la inflación.

Retiros voluntarios, prejubilaciones y contratos basura estuvieron siempre al alcance de las terminales para disponer del plantel de trabajadores en función de las fluctuantes necesidades de producción. No conocemos, por parte del Smata, ni siquiera un comunicado que haya alertado o denunciado públicamente esta situación, ni qué decir de una medida en defensa de los trabajadores.

Bien conocen los trabajadores el rol jugado por la dupla Pignanelli-Manrique durante el

conflicto desencadenado en Lear ante los despidos de la patronal. En esa ocasión fueron enérgicos los comunicados en los principales diarios, no a favor sino contra los despidos, haciendo frente único con la patronal y la Gendarmería. Iniciamos una fuerte campaña por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y por la ocupación de toda fábrica que cierre o despidiera masivamente. Defendamos cada uno de los puestos de trabajo. Que la crisis la paguen los capitalistas.

Gaspar S.

Los despidos en el Hospital Posadas

Por un paro hasta reincorporar a todos los compañeros

Los rumores finalmente se confirmaron: el martes 15 de marzo, el hospital amaneció con cientos de telegramas de despidos. Ante semejante noticia, los trabajadores se fueron concentrando en el hall del hospital.

Una masiva asamblea de casi mil trabajadores convocada por ATE, en la que participaron también los sindicatos Cicop y STS, votó por unanimidad el paro y movilización a la Gobernación en La Plata para el 16 de marzo, día del paro nacional convocado hace días. En la misma asamblea se planteó la necesidad de desarrollar un plan de lucha para frenar el ajuste y los despidos. La decisión de definir las medidas a tomar quedó supeditada a una próxima asamblea el jueves, aunque quedó para una asamblea para el jueves por la mañana, la decisión de definir las medidas a tomar, se hace evidente que con el telegrama en mano, ya no se puede especular y es necesario parar hasta reincorporar a todos los compañeros.

La trabajadora del Hospital

Posadas y miembro de la agrupación Tribuna Estatal, Jimena Lettieri, declaró: "Estos despidos se enmarcan en un plan estratégico de las autoridades y el gobierno que apunta a la privatización del hospital. Los despidos afectan a diferentes áreas como Limpieza, Seguridad, administrativos, docentes del Jardín Maternal, etc. En muchos casos, con más de diez años de trabajo. Desde hace mucho venimos denunciando la realización de una enorme campaña mediática por parte de las autoridades, donde se trató a los trabajadores de ñoquis, saboteadores y violentos, justamente para justificar esta ola de despidos en el hospital más grande de la provincia de Buenos Aires". Y agregó: "Somos conscientes de que un hospital con menos trabajadores, es un hospital que va a brindar

menos salud a la población. Por ello, la lucha que emprendemos para reincorporar a los compañeros también se inscribe en una lucha por la defensa de la salud pública, gratuita y de calidad".

Por último, señaló: "Es necesario tomar los ejemplos de lucha que se dieron ante los despidos recientemente, como los compañeros de Educación de La Plata, que después de un paro por tiempo indeterminado y ocupación de la dependencia lograron reincorporar a todos los compañeros. Es necesario poner en alto que la estabilidad laboral en nuestro hospital es una lucha de mucho tiempo y hace muchos años que no había despidos. No podemos dejar pasar éstos".

Jimena Lettieri

EXCLUSIVOS DE INTERNET > CULTURA > WWW.PO.ORG.

"El hijo de Saúl": el horror de la decadencia capitalista. Por Rafael Santos

EN LA CARPA DE LUCHA

Pitrola y Sosa con despidos del Banco Central

Los diputados nacionales Néstor Pitrola y Soledad Sosa (PO-Mendoza), se reunieron hoy en la carpa de lucha contra los despidos en el Banco Central con los trabajadores, delegados del gremio y miembros de la Comisión Directiva de La Bancaria encabezados por su secretario general Sergio Palazzo. El intercambio fraternal reunió a decenas de trabajadores.

Pitrola y Sosa señalaron: "Les traemos la solidaridad del Partido Obrero a esta lucha que es parte del ajuste que ya está en marcha y ha sido la condición del vergonzoso pacto buitres que mañana votarán los diputados de las fuerzas comprometidas con todo el desarrollo de una deuda ilegítima y usuraria". Los trabajadores explicaron que se trata de trabajadores mayoritariamente de planta permanente. Pitrola y Sosa felicitaron la actitud de lucha que mostró a La Bancaria reclamando ante el Congreso, el día en que su columna coincidió con la movilización del PO ante la apertura legislativa.

"Les traemos también nues-

tros proyectos de ley de Abolición de Ganancias en los salarios de convenios colectivos y el proyecto de prohibición de despidos por un año. Dos banderas que en nuestra opinión serán arrancadas por la clase obrera con sus métodos de lucha, por eso para nosotros es hora de un paro nacional por ellas y contra el ajuste", indicó Pitrola. "Los proyectos parlamentarios están al servicio de ese objetivo. Su tratamiento no es canjeable por el pacto buitres, porque el ciclo de endeudamiento que abre llevará a más confiscación a los trabajadores".

Sergio Palazzo manifestó que en ambos puntos acuerda el gremio y que, precisamente la posición de La Bancaria es anular el pago de ganancias en salarios convencionales y no un mero retoque del mínimo no imponible que se lo lleva la inflación. Los dirigentes manifestaron que antes de las paritarias, 20 mil nuevos bancarios ya pagan ganancias después del decreto de Macri.

Partido Obrero

ELECCIONES GRAFICAS

En un gremio paralizado por la burocracia, votar a La Naranja

Bravetti (secretario general) - Viñas (secretario adjunto) - Pitrola (primer congresal)



La Nación: plenario de delegados y plan de lucha ¡ya!

La patronal mandó 31 telegramas de despido con el argumento de anular el turno mañana. En el marco de la conciliación obligatoria redobló la apuesta y planteó deshacerse del 40% del personal. La Verde condena a los trabajadores a pelear solos, apostando al desgaste y la desmoralización de los compañeros más decididos en la lucha.

La nueva propuesta de despi-

dos duplica el número original y recae sobre los "contratados" (con 5, 6 y más años de antigüedad), quienes son excluidos por la Verde de la vida sindical de la fábrica no participan ni de las asambleas. Es una forma de avallar el fraude patronal.

La empresa deja pasar el tiempo, apostando a la ausencia de un plan de lucha de todo el gremio, para dejar caer los contratos en abril, deshacerse del personal y ultraflexibilizar al resto.

Es necesario un plenario de delegados en las puertas del diario que discuta un plan de lucha para frenar los despidos en La Nación y en el gremio. Todo lo demás es dilación para dejar pasar los despidos simulando luchar. La "resistencia al neoliberalismo" tan proclamada tiene un enorme desafío en el diario más neoliberal del país. La Naranja está desde el primer día a entera disposición de esta lucha.

Pesout: que la patronal pague lo adeudado

El año pasado, la patronal impuso a los trabajadores un semestre "de gracia" con respecto a las paritarias -o sea, no pagar durante seis meses el aumento paritario correspondiente. Pero el "período de gracia" ya lleva 11 meses sin que la Verde haya dado una respuesta. La deuda también se extiende al aguinaldo. Y el salario lo cobran en forma de "vale" semanal de acuerdo al capricho patronal.

La presión ejercida por los compañeros motivó un paro en la planta. Arrancaron el compromiso de cobro del 35% del aguinaldo para el 18 de marzo.

La semana pasada hubo dos despidos en una clara señal contra el reclamo obrero. La burocracia los dejó pasar sin inmurtarse. Si la empresa aduce crisis, que abra los libros.

Hay que discutir un plan de lucha en caso de que la empresa no cumpla con su palabra. La denuncia en el ministerio, acompañada de una acción sindical, debe ser el primer paso. Paralelamente exigir que salde lo adeudado.

Sixis: víctima del Código Civil K

El cierre de Sixis, cuya principal actividad estaba relacionada con la facturación impresa, tiene dos fundamentos. Uno es el Código Civil K, que impulsa la facturación digital, y otro, la absoluta parálisis de la Verde frente al problema.

Los despidos y cierres de empresas en los últimos dos años se han multiplicado estrepitosamente y aumentan día tras día. Estamos frente a una verdadera masacre social en el gremio, mientras la burocracia intenta salvarse el pellejo acomodándose en la interna del PJ.

Los únicos dos candidatos a

Comisión Directiva de la Verde que trabajan en sus talleres están viendo, impotentes por su política, como sus propias patronales despiden trabajadores.

Los gráficos necesitamos una alternativa

Este cuadro de derrumbe de la actividad gráfica se fundamenta en la recesión económica por un lado, y el avance tecnológico utilizado contra los trabajadores, por el otro. Pero el engranaje fundamental para que el ajuste se descargue sobre la espalda de los trabajadores es la burocracia ongarista, cuya supervivencia depende de la derrota de la clase obrera por parte del gobierno macrista.

Este 15 de abril, los gráficos tenemos en la Lista Naranja Gráfica una alternativa para enfrentar el ajuste patronal. Una lista encabezada por los talleres que hicieron carne el programa de los trabajadores: estabilidad laboral, salarios dignos y mejores condiciones de trabajo.

Sebastián Rodríguez, secretario general de Morvillo, candidato a secretario de Organización

DOCENTES SANTIAGUEÑOS

Vamos por un paro nacional

Más de 200 delegados escolares santiagueños votaron, en el primer plenario provincial de delegados escolares, un plan de lucha exigiendo el pase al básico de todos los montos en negro, la apertura de paritarias en la provincia y el sobrepago de los compañeros Garnica y Palomo.

La propia realización del plenario fue un gran triunfo del movimiento docente: se conformó un ámbito de coordinación para docentes afiliados al sindicato Cisadems, docentes sin afiliación gremial, docentes privados, etc. Hubo presencia de combativas delegaciones de todo el interior provincial, que se destacaron por compartir sus profundas experiencias de lucha y por la claridad de los reclamos (hay acampes docentes en 18 localidades de la provincia).

En primer lugar, el plenario votó dar un carácter masivo a la movilización provincial del jueves 17. El plenario también votó exigir a las centrales sindicales (Ctera, CEA, Sadop, etc.) un paro

nacional no sólo en apoyo a la lucha santiagueña sino también en coordinación con las diez provincias con docentes en lucha. A la vez, votó exigir la realización de una marcha federal docente, con fecha tentativa para el martes 22 o el martes 28.

Se aprobaron también otras mociones de distinto tenor, entre ellas una jornada provincial de cortes de ruta para el próximo viernes 18 de marzo, y una movilización provincial a Termas de Río Hondo para el viernes de Semana Santa y el viernes 1 de abril, con el fin de realizar una gran protesta en el medio de la temporada alta turística y el Moto GP (premio internacional de motociclismo).

La docencia santiagueña traza una perspectiva de lucha para los docentes de todo el país. ¡Vamos por la marcha federal educativa y el paro nacional! Este jueves, ¡todos a la marcha provincial!

Corresponsal

EXCLUSIVOS DE INTERNET > SINDICALES > WWW.PO.ORG.AR

Ex trabajadores de Gas del Estado: masiva asamblea votó luchar por el resarcimiento. Por Silvia Jayo

Televisión: por un paro general y un plan de lucha para enfrentar los despidos. Por Agrupación Naranja de Televisión

Astilleros Río Santiago: corrupción y complicidad de ATE. Por Nicolás Fassero y Gabriel Silisque

Cresta Roja: se hace urgente retomar la iniciativa. Por Emiliano Bonfiglio

San Martín: municipales pelean por aumento de salarios. Por Christian Mayer

Papeleros: construyamos una nueva dirección clasista y antiburocrática. Por Wer

EXCLUSIVOS DE INTERNET > POLÍTICAS > WWW.PO.ORG.AR

Pergamino: asamblea popular y pueblada contra el tarifazo. Por Nora Biaggio - Lautaro - Manuel Curín

Buitres: el espejo de Venezuela en 1903. Por Rafael Santos

Tarifazo en Buenos Aires: todos a la audiencia pública del 23 de marzo. Por Lisandro Martínez

La política de viviendas de Urtubey.

BRASIL

El final lamentable y vergonzoso del Partido de los Trabajadores

Por un congreso de bases del movimiento obrero

El PT surgió en el escenario político de Brasil como consecuencia de la descomposición del régimen militar que había sido establecido en 1964 y como consecuencia de un fuerte desarrollo de la clase obrera. Este desenvolvimiento fue acompañado por la emergencia de numerosos sindicatos independientes y la creación de la Central Unica de Trabajadores. Constituyó, por todo esto, la mayor tentativa de desarrollar un partido obrero independiente en América Latina en décadas, incluso con la fuerte traba potencial que implicaba el establecimiento de una dirección política constituida por una burocracia sindical en formación aliada a una pequeña burguesía que se estaba reconvirtiendo del stalinismo y del castrismo.

La llegada del PT al gobierno fue del todo singular. Aunque había atravesado un 'período de prueba' en la gestión de gobernaciones y municipios, el PT se vio obligado a adoptar un procedimiento excepcional para ser aceptado como partido de gobierno. El propio Lula se encargó de advertir a los delegados del Congreso Nacional reunido a principios de 2002 que si deseaban ocupar el Palacio del Planalto en las elecciones de ese año, debían estar dispuestos a "tragarse sapos". El primero fue, indudablemente, el requerimiento de la compañía, como candidato a vicepresidente, de un empresario textil, evangélico y fundador de un partido de la derecha brasileña. No fue, con todo, el sapo más grande. Cuando el presidente en funciones, Fernando Henrique Cardoso, reclamó el apoyo del FMI para hacer frente a la enorme crisis económica que había comenzado en 1999, el FMI puso como condición que el acuerdo fuera firmado por los partidos que competían en la elección. Lula aceptó con entusiasmo esta extorsión, ofreciendo el primer caso de un partido que sustituía su programa por un programa confeccionado por la principal institución del capi-

tal financiero internacional. Para ser rigurosos es necesario destacar, sin embargo, que esta línea de tragarse sapos venía de antes: el hecho más importante es la paz social que había firmado Lula con los terratenientes y el capital sojero de Brasil, en un país donde la cuestión agraria es conocida y explosiva.

Ya en el gobierno, el PT dio varios pasos adicionales. El primero, enseguida de asumir, fue la firma, por parte de Lula y el presidente del Citibank, de un pacto financiero para que la banca norteamericana levantara el bloqueo a los créditos destinados a financiar la exportación de Brasil -12 mil millones de dólares de aquellos años (lo explica William Rhodes en el *Financial Times* del 24/6/04). De inmediato, designó para presidir el Banco Central a un altísimo funcionario del Bank of Boston, Henrique Mireilles. El gabinete apuntado para la gestión incorporó a ministros designados por el PMDB, así como a numerosísimos funcionarios en distintas reparticiones del Estado. El PMDB no solamente es el mayor partido de la burguesía brasileña sino también una criatura sobreviviente de la dictadura militar. Es también la agrupación más corrompida ("fisiológica", en la "gira" local) de la política brasileña. Aunque la prensa y la opinión pública hablaran del "gobierno del PT", no era el caso obviamente: era un gobierno capitalista de coalición con la burguesía y la derecha del país. El programa antiobrero que aplicó enseguida provocó la escisión de un número importante de legisladores y la formación del PSOL, una coalición de agrupaciones que se había 'tragado todos los sapos' precedentes.

En este cuadro estalla el primer gran episodio de corrupción: el llamado "mensalão", por el cual se utilizaba dinero público para conseguir los votos de la bancada del PMDB, en casos no necesariamente controvertidos, para

aprobar los proyectos del gobierno; el lubricante de la coalición con la burguesía era la corruptela. No obstante esto, quienes hoy aseguran que la corrupción es común tanto a la derecha como a la izquierda, en aquellos momentos saludaban el 'liderazgo' de Lula y la supuesta elevación de la misérrima población brasileña a la categoría de "clase media C". El mensalão produjo las primeras bajas en el gobierno, cuando la Justicia condenó al número dos del PT, Jose Dirceu, un ex guerrillero castrista devenido en un 'realpolitiker' del capitalismo. Lo instructivo de todo esto -si se lo puede llamar así- es que la corrupción se instaló en el nuevo gobierno desde el principio, como un mecanismo que habilitaba el funcionamiento de un régimen de coalición con la burguesía nacional. De aquellos polvos vienen estos lodos que ahora parecen comprometer la continuidad del gobierno de Dilma Rousseff. El mecanismo del poder se ha puesto en reversa: los votos del PMDB se han convertido ahora en árbitros de un juicio político contra la Presidenta -que, por otra parte, tampoco es oriunda del PT sino del PDT, un partido nacionalista que había quedado confinado al estado de Rio Grande do Sul.

Petrobras, Odebrecht, Eike Batista

Como lo admite con descaro toda la prensa, las coimas de Petrobras vienen de lejos; afecta al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (un ex izquierdista y famoso intelectual convertido en agente del Departamento de Estado de Estados Unidos) y al padre del actual presidente de la constructora y empresa de ingeniería Odebrecht. El destape de la corrupción ahora es la consecuencia del choque violento de intereses contrapuestos en la burguesía brasileña y en el capital internacional.

Los gobiernos 'petistas' habían convertido a Petrobras y a las constructoras (y también



El destape de la corrupción ahora es la consecuencia del choque violento de intereses contrapuestos en la burguesía brasileña y en el capital internacional.

a la minera Vale) en el pivote de un desarrollo industrial de Brasil. La explotación de los yacimientos pre-sal mediante enormes inversiones y el monopolio operativo de Petrobras pretendía desarrollar una periferia industrial relevante, sea de servicios tecnológicos como de refinerías y producciones derivadas del petróleo. Este plan entró rápidamente en conflicto tanto con las petroleras internacionales, que reclamaban licitaciones abiertas de explotación, como con los accionistas internacionales de Petrobras, que cuestionaban la rentabilidad de las inversiones, así como el recorte de los dividendos en beneficio de las inversiones. Es así que a medida que la actividad de Petrobras crecía, su cotización en la Bolsa de Nueva York caía; hoy, en el pozo de la crisis, es un 80% inferior a su punto más alto. En el marco de este plan, el gobierno de Lula intentó crear una burguesía

petrolera nacional, mediante fuertes concesiones y apoyos financieros a un aventurero, Eike Batista, el cual se lanzó a un incesante acaparamiento de empresas mediante deudas. La primera señal del derrumbe que se desarrolla en la actualidad fue la declaración de quiebra de Batista y toda su red de empresas, agobiado por un endeudamiento que no podía renovar ante los síntomas de crisis en el mercado petrolero internacional. La revelación pública de las coimas de Petrobras interviene cuando la caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo invalida la tentativa industrializadora, ya que priva a la petrolera de capacidad de inversión. Petrobras ha comenzado a malvender activos en gran escala, por un lado para pagar deudas, pero también para asegurar la continuidad de sus proyectos más relevan-

tes. En Nueva York, los accionistas de Petrobras reclaman un resarcimiento por el dinero sustraído a las utilidades por las coimas. Hace tres semanas, Dilma dio el paso más duro: eliminó el monopolio de Petrobras como operadora de los yacimientos pre-sal -la principal exigencia del capital financiero internacional y ¡de las bancadas aliadas del PT! La Presidenta asegura que no va a renunciar, bajo ninguna circunstancia, pero ya ha renunciado a los objetivos básicos de su gobierno. Las constructoras brasileñas se encuentran entre las más importantes del planeta. Lula ha sido su principal lobbista en el país y en el exterior. Coimeado o no, su rol como líder obrero ha quedado completamente desnaturalizado -es un gerente de las firmas capitalistas. Oderbrecht, Andrada Gutierrez, Camargo Correa y otras no solamente se beneficiaron de los contratos de obras de Petrobras, por los cuales han pagado coimas a diestra y siniestra. Gran parte de la política exterior de Brasil se atuvo a los intereses de ellas. Lula se adelantó a Obama en la obtención de concesiones en Cuba para las constructoras brasileñas -lo cual lo convierte en un ariete de la privatización de empresas en Cuba y de la ruptura del monopolio del comercio exterior de la Isla. Lo mismo en Venezuela, Nicaragua, Bolivia o El Salvador, que tienen en común su condición bolivariana. El cabo electoral de Lula, João Santana (que también lo fue de De la Sota y Duhalde) organizó las campañas electorales en esos países en función de los intereses de Brasil. Brasil dirigió la campaña electoral de Ollanta Humala, el cual se había comprometido a otorgar la concesión de las construcciones de rutas y oleoductos hacia el Pacífico a Oderbrecht. La corrupción social y política de la dirección y el aparato del PT es considerablemente mayor que la que deriva de las coimas que le son imputadas. Es lo que simplemente olvidan quienes salen a defender a una organización que se declara políticamente de los trabajadores. La camarilla petista ha trabajado con dedicación para destruir la condición clasista de la izquierda y el movimiento obrero en América Latina. En las elecciones para elegir la representación obrera en el Consejo de Petrobras, hace tres semanas, el sindicato de la CUT fue derrotado por una improvisada lista independiente. Los obreros de la petrolera perciben que el gobierno de Rousseff está destruyendo a Petrobras y cediendo a la presión financiera internacional,

con el único pretexto de salvar su propio pellejo. El potencial de derrumbe económico que encierra el desmantelamiento de Petrobras y de las propias constructoras podría llevar a Brasil rápidamente a una situación pre-revolucionaria.

El golpe

La destitución de Dilma Rousseff es reclamada por todos los sectores capitalistas que han chocado con el gobierno en los últimos años. No han conseguido todavía reunir, sin embargo, una mayoría parlamentaria para proceder al juicio político de la Presidenta, porque las consecuencias serían muy graves para otros intereses tanto o más poderosos. Una gran parte de los destituyentes parlamentarios enfrentan procesos de corrupción a igual título que los funcionarios del gobierno o los dirigentes del PT. En la burguesía se teme, por sobre todo, el estallido de una rebelión popular, que sería la consecuencia del vacío de poder que podría producir una transición precaria, y de los planes de ajuste que aplicaría un nuevo gobierno. Los ajustes petistas ya han producido casi dos millones de despidos o suspensiones. Puede sorprender que la burguesía industrial de São Paulo sea abiertamente golpista, en contraste con el silencio relativo del capital sojero -el cual está recibiendo los beneficios de una gran devaluación de la moneda, el real. Ocurre que esta burguesía industrial ha sido marginada de las tentativas de industrialización de Lula, porque quedó expuesta a la competencia demolidora de China -una gran aliada de Petrobras y las constructoras. Las grandes acerías brasileñas encabezan la campaña internacional para penalizar la exportación siderúrgica de China. La burguesía paulista reclama la sanción de una "ley compasiva", que blinde el capital de las empresas de los perjuicios que ocasionen los ejecutivos de ellas (*Ambito*, 10/3). De lo contrario, arguyen, podría venirse abajo el patrimonio de numerosas compañías. El paso siguiente sería la absolución o la disminución de penas por parte de los tribunales de apelaciones o la Corte Suprema.

La charlatanería característica en estos casos, atribuye a la independencia de la Justicia el conocimiento y la sanción de la corrupción. Esa Justicia, en realidad, está sustituyendo la aportación de pruebas materiales de los delitos por un sistema de coacción penal que ofrece rebaja de penas y arrestos domiciliarios a quienes confiesen responsabilidades y



En la burguesía se teme, por sobre todo, el estallido de una rebelión popular, que sería la consecuencia del vacío de poder que podría producir una transición precaria.

delaten a supuestos cómplices. Semejante procedimiento sería fácilmente cuestionado en una apelación, incluyendo un cambio en la opinión de los nuevos jueces. La Justicia es un poder del Estado, que en ningún caso irá contra el poder de ese Estado. Mauricio Oderbrecht, el presidente del conglomerado, ha dicho que apelará su condena a 19 años, porque el expediente abundaría en delaciones y estaría carente de pruebas. La llamada "ley del arrepentido" otorga poderes discrecionales a jueces, investigadores y policías contra los derechos ciudadanos.

No se puede dejar fuera de foco la implicancia internacional que tendría un desplazamiento del gobierno de Dilma. Aceleraría el proceso para poner fin al gobierno de Maduro, en especial por el impacto que tendría en las fuerzas armadas de Venezuela un 'golpe blanco' en Brasil. En Uruguay, se está desarrollando en torno a acusaciones de corrupción en la petrolera estatal Ancap, un proceso similar al de Brasil. Por último, sería un espaldarazo al gobierno 'buitre' de Macri. La desvalorización enorme que ha sufrido la Bolsa de São Paulo es un bocado de cardinal para los bancos y fondos de cobertura internacionales; Brasil se vería obligada también a renegociar la deuda pública. El aguijón de la crisis lo constituye, sin sombra de duda, la voracidad del capital internacional para lograr un nuevo reparto de patrimonios y capitales en Brasil. La deuda externa de Brasil, pública (80% del PBI) y privada (70%

del PBI) es de 3 billones de dólares.

El movimiento obrero

El domingo 13 está prevista lo que sería una gran manifestación a favor del juicio político para destituir a Dilma. La dirección del PMDB se encuentra atenta a los resultados para determinar si se retira del gobierno e inviabiliza de este modo la gestión de Rousseff y lograr una renuncia que evite el 'impeachment'. No existe ninguna posibilidad, sin embargo, de que estas manifestaciones atraigan a la masa del pueblo pobre y trabajador, que conoce bien a sus inspiradores. No sería, sin embargo, la primera vez que cae un gobierno por presión de un movimiento civil minoritario. Es significativo que a los organismos convocantes les importe poco que el encargado del juicio político a la Presidenta sea el Congreso más corrompido de la historia brasileña.

Frente a la amenaza de golpe a cargo de un parlamento de corruptos, el PT se encuentra 'groggy', debido a su complicidad evidente con el favoritismo a los conglomerados capitalistas y la corrupción, y como consecuencia de su complicidad con la política de despidos masivos que asola Brasil. La única oposición a la salida capitalista catastrófica a la crisis en curso, incluida la oposición a un golpe 'blanco', es la que puede partir de la clase obrera. Por eso entendemos que lo que se encuentra a la orden del día es el llamado a un congreso de trabajadores, electos en lugares de

trabajo y en asambleas, para lanzar una movilización contra despidos y suspensiones, contra el desmantelamiento o privatización de empresas del Estado y contra cualquier salida golpista de parte de un Congreso de delincuentes políticos y económicos. La reivindicación de una Asamblea Constituyente no tendría otra implicancia que poner fin al gobierno de Dilma Rousseff, lo cual, en el momento actual, potencia la agitación golpista. Solamente cuando la clase obrera haya reunido las condiciones mínimas de movilización para poder pelear por su propia salida a la crisis, esa reivindicación podría ser una herramienta de lucha. No es aceptable ninguna forma de frente único de hecho con la movilización golpista. La iniciativa de un Congreso obrero de delegados, que debería ser dirigida a todos los sindicatos y comisiones de fábrica de la CUT, podría ser adoptada conjuntamente por la central sindical combativa, Conlutas, y por la izquierda constituida por el PSOL y el PSTU. Este congreso se convertiría en punto de polarización de los trabajadores en el caso de que prospere un 'impeachment' y con él una situación de mayor crisis económica y política. Brasil vive una circunstancia singular donde gobierno y golpistas rivalizan en el tamaño de su debilidad política y la carencia de apoyo político propio.

Jorge Altamira (12/3)

(Nota publicada en: <https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/?fref=ts>)

El referéndum británico profundiza la crisis en la Unión Europea

El 23 de junio se votará la continuidad de Gran Bretaña en la Unión Europea. El alcalde tory de Londres, Boris Johnson, seis ministros del gabinete de David Cameron, la mitad de los diputados conservadores y varios laboristas, anunciaron que apoyarán el "Brexit" (salida), lo que produjo pánico financiero y la caída más grande de la libra esterlina desde 2009. Johnson manifestó que no pretende irse de la Unión Europea (UE) sino renegociar la permanencia. Los fascistas de Ukip también están a favor de la ruptura.

Gran Bretaña tiene uno de los déficits de cuenta corriente más importantes de la OCDE, y un sector de su burguesía alienta la salida devaluatoria para licuar deuda. Goldman Sachs pronosticó que el Brexit llevará a devaluar un 20% más (*IBT*, 22/2); y el Citi y Deutsche Bank que superará la devaluación del euro hasta la paridad con el dólar (*Telegraph*, 23/2). Luego de la devaluación china y su derrumbe financiero, sigue Londres.

Una devaluación no solucionará la caída de ganancias y la toxicidad del sistema financiero. Lo que se gana en el abaratamiento de las exportaciones industriales, se pierde por las importaciones y la caída de los acuerdos comerciales europeos; sumado a que un cuarto de los

activos de deuda están en manos de bancos extranjeros y la repatriación (fuga de capitales) de sus operaciones agravaría la crisis (*Financial Times*, 28/1). Los activos británicos se harían menos atractivos para inversores y una menor calificación significaría crédito caro, recesión y déficit fiscal.

El Citi dijo que "el Brexit también animaría a la secesión de escoceses y catalanes por otra vía, al demostrar que la Unión Europea es más porosa de lo que parece, dándoles esperanzas de seguir dentro de la Unión aunque se separen de sus actuales Estados" (*Expansión.com*, 25/2).

La salida de Gran Bretaña aceleraría las tendencias a la disolución de la Unión Europea.

In y out

A mar revuelto, los Hedge-Funds apoyan el Brexit porque permitirá el "shorting" (comprar acciones tomando crédito de un inversor de la City, y vender para recomprarlas cuando caigan). Mientras que los bancos de la City (Goldman Sachs, Citigroup, entre otros) están contra el Brexit porque defienden a Londres como plaza financiera europea, en recompensa por la estatización de sus deudas. El imperialismo europeo y norteamericano juega sus fichas por el "In" (HSBC, Deutsche Bank, JP Mor-

gan). Saben que el Brexit -como el Grexit- desataría un derrumbe bancario imparable.

Según YouGov, las grandes empresas apoyan en un 93% el In (*yougov.co.uk*, 25/1), que baja a 63% en la Cámara de Comercio (*The Economist*, 3/3). El "Big Business", 36 de las 100 compañías más grandes del FTSE, ligadas a los negocios continentales como Vodafone y Shell (*Financial Times*, 22/2), y la mayoría de la Cámara de Comercio, piden la permanencia (*www.businessforneweurope*). El 77% de la industria automotriz está por el IN (*www.smm.co.uk*, 3/3). En la pequeña industria, la permanencia sólo obtiene el 47% contra el 42% en favor de la salida. Los pequeños industriales y comerciantes, están contra las regulaciones laborales y de contratación europea (*www.businessforbritain*) y en favor de "renegociar con la UE" como pide Johnson. Sin embargo, según *The Economist*, Gran Bretaña tiene uno de los mercados menos regulados de Europa (3/3).

El laborismo y la izquierda

El laborismo está por el "In", con la consigna de una Europa más regulada para "proteger los derechos de los trabajadores". Bajo la amenaza de la pérdida de puestos de trabajo, el laborismo enrola a la clase obrera bajo una



El primer ministro David Cameron y la canciller alemana Angela Merkel.

salida imperialista de ajuste.

La izquierda está dividida. El bloque "Otra Europa es posible" pretende "reformar las instituciones europeas", al lado de Syriza, Podemos, Bloco de Esquerda, y los Verdes. Son los agentes "por izquierda" del imperialismo y el gran capital europeo.

Otros grupos menores (PCGB, Partido Socialista) y distintos intelectuales y activistas, apoyan la salida. Explican que el referéndum griego ha demostrado que la democracia es imposible en la Unión Europea (UE), y apelan al voto histórico de la izquierda británica (y del laborismo) por el "Out". Plantean una Europa democrática que rechace

el TTP y las políticas xenófobas.

La izquierda no debe hacer seguidismo a lo que son dos variantes que intentan salvar al capital británico de su crisis a costa de los trabajadores. Ninguno de los campos pone en cuestión, por ejemplo, a la monarquía. La izquierda debe oponer un planteo propio y explotar la situación creada para desarrollar una fuerza revolucionaria. La ruptura con la UE debe encararse con un planteo independiente: abajo la monarquía, por una federación socialista de Gran Bretaña e Irlanda en el marco de los estados unidos socialistas de Europa.

Emiliano R. Monge

Precio en Uruguay \$ 10.00
Distribuidor en Uruguay: Heber Barrie y Neri Martínez
Paraná 750 - Tel.: 905155/920723. Montevideo - Uruguay

Distribución en el Interior del País
DISA Distribuidora Interplazas Sociedad Anónima
Pte. L. S. Peña 1836 - Tel/Fax 6304-9377

Editado por Ediciones Rumbos (e.l.). Editor responsable: J. C. Rath. Domicilio: Saavedra 427 (1083) Capital Federal.
Registro de la Propiedad Intelectual N° 192.643. Impresora Balbi S.A. Av. Crisólogo Larralde 5820, Wilde
Pta. de Buenos Aires. • Distribución en Capital y Bs. As.: Loberto -Virrey Ceballos 643

ISSN 0329-8760
01403
9 770329 876006

En defensa del marxismo 46

Hacia el XXIII Congreso del Partido Obrero Argentina ingresa a la crisis mundial

Por Marcelo Ramal y Juan Pablo Rodríguez

Puntos para el debate de una resolución internacional
Por Pablo Heller y Juan García

Grecia: el eslabón roto
Por Savas Michael-Matsas

Trotskismo y guevarismo en la revolución cubana
Por Daniel Gaido y Constanza Valera

Revolución y guerra en Vietnam
Por Paulo Wermus

La "Historia de la Revolución Rusa"
como manual para el historiador
Por Guillermo Kane

Las leyes laborales de la Rusia soviética
(una crítica y una respuesta)
Por Oficina de Rusia Soviética en New York, 1920

Orígenes del socialismo y el movimiento obrero en Brasil
Por Osvaldo Coggiola

Adquiérala en Mitre 2162,
y en todos los locales del Partido Obrero

EXCLUSIVOS DE INTERNET > INTERNACIONALES > WWW.PO.ORG.AR

Crisis y refugiados: un momento decisivo en Europa. Por Michael Matsas

AGENDA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

JORGE ALTAMIRA
Tres de Febrero. Martes 22. Untref: Charla debate junto a Elia Espen. En Valentín Gómez 4828/38- Caseros.
Escobar. Miércoles 30 a las 20 hs. Universidad Popular de Escobar, La Plata 1270, Maschwitz.

NESTOR PITROLA
Malvinas Argentinas. Miércoles 23 en la Unga: Charla debate junto a Elia Espen. En Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines.

ZONA SUR

Avellaneda. Festival contra la impunidad. Viernes 18. En Plaza Alsina, Av Mitre y Alsina. 18 hs.
Almirante Brown. Adrogué. Jueves 17, Instituto 41. Cine: "40 Balas" En Esteban de Adrogué y Espora.

ZONA NORTE

San Isidro. viernes 18: Noche cultural con artistas en San Isidro. En Colectora Panamericana Este 2732 esquina Márquez.

Vicente López. Sábado 19: Participamos de festival junto a organizaciones ambientales y centros culturales. En Avenida Maipú y estación Mitre.

LA MATANZA

Laferrere. Viernes 18. Charla abierta 10 hs. En Icalma 3705, Villa Unión.

Villa Madero. Viernes 18. Cine-debate, película "40 balas", 21 hs. En Olavarría 1620.

Virrey Del Pino. Viernes 18. Cine-debate, película "40 balas" 19 hs. En

Campana 7750, barrio El Sol.

Casanova. Viernes 18. Cine-debate, película "40 balas" 21 hs. En Islas Malvinas 2931.

CIUDAD DE BUENOS AIRES Domingo 20

16 hs, festival en Plaza "La Nueva", Villa Pueyrredón.

Desde el mediodía, festival en **Parque Rivadavia.**

Desde el mediodía, jornada cultural en **Boedo.**

17 hs, jornada cultural y acto de la UJS, en Bulnes al 2700 (**nueva casa de Pedraza**).

- Festival en **Parque Lezama.**